

NEW LEFT REVIEW 154

SEGUNDA ÉPOCA

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025

EDITORIAL

SUSAN WATKINS Israel después de Fordow 7

ARTÍCULOS

MARTTI KOSKENNIEMI Las leyes que nos gobiernan 19

KEVIN GRAY Vino añejo en botellas nuevas 58

JULIA HERTÄG Cine y clase 85

AARON BENANAV Más allá del capitalismo—2 113

CRÍTICA

CAROLYN LESJAK Escribir lo colectivo 167

JONATAHN RÉE La ideología analítica 178

JULIAN STALLABRASS Artes de la distracción 186

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)



SUSCRÍBETE

ts
traficantes de sueños



MÁS ALLÁ DEL CAPITALISMO—2

Las instituciones de la economía multicriterio

● **CÓMO FUNCIONARÍA UNA** economía moderna, si estuviera impulsada por múltiples objetivos sociales en lugar de por la búsqueda del beneficio privado? En la primera parte de esta contribución analicé las formas en que la tradición socialista clásica abordó esta cuestión, repasando el arco que corre de los utópicos del siglo XIX a los industrializadores intensivos de la Rusia soviética, los planificadores de la Viena Roja, los socialistas gremiales de la Gran Bretaña eduardiana y los arquitectos del Estado del bienestar del periodo de posguerra¹. Un problema importante que estos actores no lograron resolver fue cómo diseñar las instituciones a través de las cuales podrían articularse y componerse múltiples objetivos determinados democráticamente con la asignación de recursos correspondiente. Las primeras ideas de una economía simple regulada por la comunidad no pudieron sobrevivir a la creciente diferenciación de las estructuras económicas y sociales provocada por el desarrollo capitalista a partir de la década de 1870, que había creado procesos de producción complejos y estratificados y, en consecuencia, formas de conocimiento y concepciones del mundo especializadas y, en ocasiones, mutuamente inconmensurables. Las nuevas luchas sociales –feministas, anticolonialistas, antirracistas– promovieron valores contrapuestos, quizá incompatibles: autonomía, igualdad, reconocimiento. La imposición de un plan uniforme anuló los objetivos más amplios en pos de la maximización de la producción e ignoró las diferencias locales reales, provocando resultados perversos.

¹ Aaron Benanav, «Más allá del capitalismo – I: Fundamentos para una economía multicriterio», *NLR* 153, julio-agosto de 2025.

Organizar una economía en torno a múltiples objetivos aumenta drásticamente la complejidad de la toma de decisiones. Las discrepancias éticas y políticas de larga data persistirán. Incluso si se lograra un amplio consenso, las limitaciones materiales y técnicas impedirían, que todas las ambiciones se hicieran realidad, lo que requeriría negociar concesiones mutuas. Además, la incertidumbre irreductible sobre el futuro implica, que nunca podremos predecir por completo las consecuencias de nuestras decisiones ni anticipar nuevos deseos y necesidades; la corrección del rumbo debe formar parte del proceso de toma de decisiones. El resultado implicará necesariamente una controversia política continua. Como reconoció Otto Neurath, ello significa que las instituciones de una economía multicriterio deben diseñarse no para suprimir los desacuerdos, sino para articularlos como alternativas inteligibles y estructurar las opciones entre ellos². Neurath y sus seguidores en la Viena de la década de 1920 lograron algunos avances, pero el auge del nazismo los aplastó y dispersó antes de que pudieran resolver qué había que hacer.

El punto de partida teórico en este ensayo se basa en la idea de Neurath de que los diferentes objetivos y valores –como un trabajo y una vivienda de buena calidad para todos, o una agricultura sostenible y el equilibrio ecológico– no son sustituibles; no pueden reducirse a una única métrica y clasificarse u «optimizarse» en consecuencia. Sus beneficios deben expresarse *en especie*, por lo que son en sí mismos, y evaluarse de acuerdo con este criterio³. Algunas líneas de actuación pueden descartarse desde el principio, si cuestan más y aportan menos en todas las dimensiones relevantes: son opciones «dominadas», en términos de la teoría de la elección racional. Pero entre las opciones viables que quedan, puede que no haya una forma automática de determinar cuál es la mejor, ni un algoritmo para tomar la decisión final. Se trata de lo que se conoce como problemas de orden parcial, queriendo decir por ello que pueden clasificarse y ordenarse parcialmente, pero no totalmente. Los problemas de orden parcial surgen en todos los ámbitos de la vida económica: en los hogares, al decidir cómo distribuir el tiempo y los recursos; en las empresas, al seleccionar los insumos y los métodos de

² Otto Neurath, «Socialist Utility Calculation and Capitalist Profit Calculation», en Thomas Uebel y Robert Cohen (eds.), *Economic Writings, Selections 1904-1945*, Heidelberg, 2004.

³ Este tipo de evaluación hace imposible el tradicional análisis de coste-beneficio. Véase Frank Ackerman y Lisa Heinzerling, *Priceless: On Knowing the Price of Everything and the Value of Nothing*, Nueva York, 2004; John O'Neill, «Cost-Benefit Analysis, Rationality and the Plurality of Values», *The Ecologist*, vol. 26, núm. 3, 1996.

producción; en los organismos de inversión, al sopesar futuros en competencia. Desde un punto de vista técnico, puede que no haya una única respuesta óptima, pero desde una perspectiva económica y política hay que tomar una decisión⁴. Esto requiere pasar de la optimización a la composición y de la teoría a la práctica. La pregunta, por consiguiente, es la siguiente: ¿cómo puede organizarse institucionalmente la composición de nuestros valores en las condiciones del mundo real?

A continuación, comienzo con una breve descripción general del conjunto institucional, que permite el florecimiento de una economía multicriterio para analizar después con más detalle la conceptualización del funcionamiento de cada uno de sus componentes, del conjunto de prácticas capitalistas que serían reemplazadas por las mismas y de los correspondientes efectos sociales. En primer lugar, cabe destacar que lo que sigue no es un plan detallado. Simplemente esboza los mecanismos mediante los cuales se podría afrontar el desafío de reemplazar la búsqueda de beneficios por otros valores objeto de discusión. Por lo tanto, este esbozo debe considerarse como un marco para el diseño institucional, necesariamente poco específico, con nombres de instituciones deliberadamente sencillos y neutros, que funciona a un nivel de abstracción suficiente para que las ideas sean aplicables en diversos contextos nacionales y adaptables a culturas, historias y luchas específicas. En segundo lugar, no se trata de una teoría sobre cuáles deberían ser esos valores. Tengo mis propias opiniones sobre lo que es más importante, por ejemplo, cómo debemos responder al cambio climático y qué tipo de mundo debemos construir como consecuencia del mismo, pero los lectores y lectoras no encontrarán esas opiniones en este ensayo. El objetivo no es prescribir un resultado ideal, sino sugerir un marco en cuyo seno las personas puedan debatir y resolver esas cuestiones por sí mismas⁵.

⁴ Véase Ralph Keeney y Howard Raiffa, *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs*, Cambridge, 1976; Bernard Roy, *Multi-Criteria Methodology for Decision Aiding*, Dordrecht, 1996 [ed. cast.: *Metodología multicriterio de ayuda a la decisión*, Santiago de Compostela, 2008]; Valerie Belton y Theodor Stewart, *Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach*, Boston (MA), 2002. Lo que se plantea en este texto no es tanto una crítica de la teoría de la elección racional como una teoría alternativa de lo que se consideraría una elección racional. Véase Catherine Herfeld, «The Diversity of Rational Choice Theory: A Review Note», *Topoi*, vol. 39, núm. 2, 2020; Amartya Sen, «Reason and Justice: The Optimal and the Maximal», *Philosophy*, vol. 92, núm. 1, 2017.

⁵ Aunque este argumento puede parecerse a la descripción efectuada por Rawls del «valor justo» de las libertades políticas, el objetivo aquí no es idealizar una lista fija de derechos, sino enfatizar su papel facilitador en la toma de decisiones colectivas, al tiempo que se reconoce que su contenido es en sí mismo objeto de controversia política.

No obstante, ningún sistema de elección colectiva puede ser legítimo, si las personas carecen de acceso a medios de subsistencia, educación, salud, tiempo o capacidad de esgrimir sus razones y opciones en la esfera pública. Sin la existencia de un zócalo común de derechos y de mecanismos procesales para garantizar su concesión e implementación, sin libertades reales y garantías materiales, la deliberación sería vacua. La definición de esos derechos y de lo que incluyen variará. Pero este marco asume que la provisión de servicios y de ingresos básicos universales es la condición, que permite a las personas participar plena y libremente en las decisiones que estructuran su mundo. Eso es lo que hace que el proyecto sea emancipador, lo que lo hace socialista.

I. PANORAMA GENERAL: MÁS ALLÁ DEL AFÁN DE LUCRO

El marco para la economía multicriterio aquí contemplada implica una serie de rupturas estructurales. Se eliminan tanto la acumulación de capital como el trabajo asalariado. La inversión ya no está impulsada por la búsqueda de beneficios, sino por el objetivo de satisfacer necesidades definidas socialmente, al tiempo que se mantiene una mayor diversidad de fines que los individuos y las comunidades deciden perseguir. Los trabajadores ya no dependen de sus empleadores para obtener sus ingresos, que son proporcionados por las Asociaciones Técnicas y la renta básica universal. Todos los proveedores, ya ofrezcan bienes y servicios públicos o privados, son entidades sin ánimo de lucro. El marco propone un papel importante para la provisión pública, especialmente en sectores como la vivienda, la educación, la salud, los cuidados y la cultura, que absorberán cantidades significativas de trabajo y recursos. Pero los mercados de consumo seguirán siendo ámbitos vitales para la elección personal.

Incluso cuando el consumo final está en gran medida desmercantilizado, la producción debe basarse en un amplio intercambio entre empresas. Basta pensar en la amplia gama de bienes y servicios intermedios necesarios para producir los productos finales más básicos. Una panadería necesita hornos, harina, servicios de limpieza, mantenimiento, *software* de contabilidad, embalajes, transporte y otros innumerables bienes y servicios. Una clínica local depende de equipos especializados, servicios de esterilización, diagnósticos de laboratorio, productos farmacéuticos y técnicos de reparación y mantenimiento de equipos. Los intercambios interempresariales son esenciales para cualquier economía compleja y

las empresas deben poder elegir a sus proveedores, sustituirlos en respuesta a retrasos o problemas de calidad, y experimentar con nuevos enfoques y asociaciones. El intercambio mercantil permite este tipo de flexibilidad y capacidad de respuesta, especialmente cuando la producción se distribuye entre muchas unidades⁶.

La cuestión, entonces, no es si debemos tener mercados, sino cómo organizarlos sin caer en una lógica estrecha basada en los beneficios, conformados por empresas centradas únicamente en la «eficiencia» de reducir costes y aumentar los ingresos como su principal preocupación estructural. Una economía multicriterio no puede organizarse de esta manera. Su objetivo no es eliminar el valor de la eficiencia económica, sino situarlo en un marco más amplio: sopesar las posibles ganancias de eficiencia junto con otros valores, como las mejoras en la sostenibilidad, la calidad del trabajo o la cohesión del vecindario. Esto requiere otra ruptura estructural. Las empresas ya no dependerán de los excedentes de ingresos para pagar los salarios o financiar inversiones futuras. Esas funciones serán asumidas por Asociaciones Técnicas y Juntas de Inversión democráticamente responsables. Este marco preserva las ventajas del intercambio mercantil –capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes, experimentación, innovación– donde más importan: en los intercambios entre empresas que sostienen el proceso de producción en general.

La introducción de un sistema monetario dual digital es la iniciativa fundamental para romper el vínculo existente entre los beneficios, los salarios y la inversión, al tiempo que se mantiene el intercambio regido por el mercado. Dos monedas distintas estructuran las transacciones: los CRÉDITOS son utilizados por los individuos para atender a su consumo personal; los PUNTOS son utilizados por las empresas y asociaciones para efectuar las transacciones entre organizaciones y la inversión. Estas monedas no son convertibles, es decir, no existe un tipo de cambio directo entre ellas. Esta separación garantiza, en primer lugar, que los ingresos para el consumo se limiten a hacer posible esa función. Los individuos no pueden utilizar sus CRÉDITOS para adquirir activos productivos, financiar inversiones o influir en las decisiones colectivas. Los desembolsos para apoyar la vida cívica, política y asociativa se realizan en

⁶ A. Benanav, «Más allá del capitalismo – I: Fundamentos para una economía multicriterio», cit.; véase también Pat Devine, *Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society*, Cambridge, 1988.

la moneda de PUNTOS, lo que los distingue claramente de los CRÉDITOS destinados a atender los gastos personales. Del mismo modo, las empresas no pueden utilizar PUNTOS como fuente de beneficios: los PUNTOS no se pueden ahorrar, reinvertir ni convertir en ingresos de CRÉDITOS, lo cual rompe el vínculo estructural existente entre la eficiencia como tal y la acumulación privada. Anima a las empresas a gastar la totalidad de sus presupuestos operativos en cada ciclo sin verse obligadas a maximizar el excedente. También hace posible un proceso de inversión distinto, gobernado democráticamente y separado de las operaciones de la empresa, que se implementa a través de las Juntas de Inversión, las cuales permiten que otros valores influyan en la configuración del proceso de producción.

Un libro de contabilidad digital abierto, la Matriz de Datos, registra los flujos de PUNTOS y CRÉDITOS, estos últimos de forma anónima, a medida que se desembolsan y gastan. Al realizar un seguimiento de las compras en tiempo real, crea un vasto espejo estadístico de la economía. De libre acceso, la Matriz de Datos puede generar informes y consultas sobre las tendencias macroeconómicas o los patrones sectoriales a petición de las partes interesadas. Las empresas pueden utilizarla para anticipar y adaptar sus planes de producción, reduciendo los inventarios para gestionar los recursos de forma más eficaz. Es fundamental que cada compra anonimizada con CRÉDITOS pueda vincularse a través del sistema de PUNTOS, mapeando cómo las decisiones de consumo individuales y las decisiones de producción de las empresas se propagan a través de cadenas de suministro más amplias, lo cual permite comprender los efectos económicos más amplios que generan las compras. A partir de ahí, puede construirse una potente infraestructura de previsión para iluminar los futuros posibles. La Matriz de Datos permite que cualquiera consulte las previsiones y realice simulaciones gobernadas por la pregunta «¿qué pasaría si...?» con el fin constatar qué cambios introducidos en las políticas o en las inversiones podrían producir resultados diferentes.

En el marco aquí contemplado, los individuos acceden a los recursos a través de cuatro canales principales: los servicios básicos universales; una renta básica universal, denominada en CRÉDITOS; una renta basada en el trabajo, también pagada en CRÉDITOS; y un presupuesto, denominado en PUNTOS LIBRES, que pueden asignar a las organizaciones cívicas, culturales y políticas objeto de su apoyo, lo cual permite a estos organismos –conocidos como «Asociaciones Libres»– operar dentro de la economía

de PUNTOS. Al mismo tiempo, las monedas digitales se emiten bajo la disciplina de una restricción presupuestaria general y las asignaciones macroeconómicas se deciden mediante debate democrático, lo cual dota de forma práctica y de urgencia al proceso de optimización multicriterio descrito precedentemente. Cada uno de los principales actores económicos –hogares, empresas, Juntas de Inversión, Asociaciones Técnicas– se enfrenta a un problema de composición: ¿cómo sopesar múltiples objetivos inconmensurables –como, por ejemplo, la seguridad, la autonomía, el sentido y la eficiencia– dados los correspondientes volúmenes disponibles de tiempo, dinero y materiales? La suma de sus elecciones, informadas por las decisiones macroeconómicas del Demos, determina la forma y el carácter de la sociedad multicriterio.

El término «empresa» se refiere aquí a todos los productores, independientemente de su tamaño o estructura: operadores por cuenta propia, pequeños comercios, cooperativas de mayor tamaño o empresas gigantes, que emplean a miles de trabajadores. Las empresas se entienden como instituciones que reúnen a personas con diferentes habilidades y conocimientos de acuerdo con un modelo dado de colaboración con un propósito definido y estructuradas por rutinas organizativas con el fin de satisfacer una determinada necesidad o deseo identificado socialmente⁷. En el modelo de la economía multicriterio, las empresas son establecidas por las Juntas de Inversión como empresas gestionadas por los trabajadores, empresas de propiedad pública y empresas sin ánimo de lucro, contando todas ellas con una asignación específica de PUNTOS. Las empresas que prestan servicios desde el seno del sector público –clínicas, bibliotecas, asociaciones de vivienda, escuelas– reciben un presupuesto en PUNTOS per cápita en función de la población atendida. Las empresas que producen bienes y servicios para el consumo individual reciben PUNTOS en función de su cuota de mercado calculada respecto al gasto de consumo socialmente efectuado. Al operar dentro de estas restricciones presupuestarias, todas las empresas deben asignar sus recursos entre objetivos contrapuestos: cumplir con altos estándares de calidad del servicio o del producto, reducir el impacto ecológico, mejorar las condiciones del lugar de trabajo, desarrollar la resiliencia ante las crisis o mantener la democracia interna. Las empresas utilizan algunos de sus PUNTOS para pagar a las Asociaciones Técnicas por la contratación de sus trabajadores, cuyo

⁷ Esto distingue a las empresas de las asociaciones, que también organizan a las personas con fines comunes, pero cuyos objetivos se definen de forma autónoma.

precio fluctúa en función de la demanda; otros PUNTOS se gastan en el alquiler de terrenos e infraestructuras de propiedad pública o en la realización de transacciones interempresariales. Las empresas también elaboran propuestas de inversión futuras para las que se emitirán nuevos PUNTOS, según lo decida su Junta de Inversión sectorial.

La inversión es el principal mecanismo que impulsa la transformación de la economía a lo largo del tiempo. Es la forma mediante la cual la sociedad amplía su capacidad, mejora sus equipos o cambia completamente de rumbo. En una economía multicriterio, la inversión no se guía por los rendimientos financieros esperados, sino por juicios sobre cómo priorizar entre futuros alternativos. Estas decisiones se desarrollan en tres niveles interconectados. Las mejoras menores se gestionan mediante asignaciones directas a las empresas por parte de las Juntas de Inversión sectoriales. Los proyectos de mayor envergadura y las estrategias a largo plazo son objeto de deliberación informada y votación por parte de las Juntas, que incluyen a representantes elegidos de los trabajadores de ese sector, además de consumidores, comunidades y expertos procedentes de Asociaciones Técnicas. Las transformaciones intersectoriales, como la descarbonización, la reparación de errores del pasado o la reducción de la semana laboral, son supervisadas por Comités de Coordinación específicos para cada proyecto. En cada nivel, las decisiones de inversión se enfrentan al mismo reto: cómo sopesar prioridades legítimas, pero a menudo incompatibles, dentro de los límites de los recursos disponibles; las restricciones presupuestarias obligan de nuevo a establecer prioridades, lo que ayuda a estructurar los desacuerdos y permite una composición transparente entre sendas rivales, como procedimiento colectivo para navegar las incertidumbres y producir las concesiones recíprocas necesarias.

El trabajo está organizado por una red de Asociaciones Técnicas, basadas en los modelos de gremios profesionales, sindicatos y organismos de acreditación, pero dotadas de un mandato ampliado para la contratación y el pago de salarios, así como para la formación, la educación continua y la investigación. Las Asociaciones Técnicas tienen la responsabilidad especial de integrar los conocimientos técnicos en el debate público, eligiendo a representantes expertos para que ayuden a orientar las decisiones estratégicas. Esto abarca no solo a ingenieros y científicos, sino también a comerciantes, cuidadores, cocineros, limpiadores y cualquier persona, cuyos conocimientos puedan ayudar a configurar la producción

y el abastecimiento. Las actividades internas de las Asociaciones Técnicas también se hallan condicionadas por problemas de orden parcial, ya que determinan cómo asignar los recursos limitados –dentro de las restricciones establecidas por sus propios presupuestos de PUNTOS asociativos– entre múltiples misiones y prioridades, de programas de contratación y formación a el gasto en I+D.

Junto a ellas se encuentran las Asociaciones Libres de carácter cívico y cultural, financiadas mediante el sistema de «PUNTOS LIBRES». Junto con las Asociaciones Técnicas, este nivel sustenta la vida cultural e intelectual de la sociedad, animando un ámbito más amplio de esfuerzo colectivo: la producción artística, la organización política, la investigación independiente y la expresión religiosa. Las Asociaciones Libres no solo operan como portadoras de valores, sino también como creadoras de valores, ayudando a la sociedad a revisar y remodelar continuamente lo que considera valioso. Aunque definen sus propios objetivos y no se encargan de obtener resultados socialmente imperativos, las asociaciones cívicas y culturales siguen enfrentándose a sus propios problemas de composición: elegir cómo perseguir objetivos plurales dentro de las limitaciones presupuestarias reales.

2. UN SISTEMA MONETARIO DUAL

En la economía convencional, los mercados se celebran como mecanismos de eficiencia autorreguladora: las empresas responden a las señales de los precios, ajustan los métodos de producción y compiten minimizando los costes y maximizando la producción para obtener recompensas monetarias. La competencia mercantil se resuelve en una delicada danza de coordinación racional, que permite una asignación eficiente sin recurrir a la planificación centralizada. Una tradición más crítica, arraigada en la economía marxista, contempla esta hipótesis en realidad como una guerra por la supervivencia. Desde este punto de vista, la eficiencia del mercado no es un signo de armonía, sino el resultado agregado de una compulsión sistémica, que atrapa a las empresas en una competencia implacable, impulsada tanto por el incentivo de obtener recompensas financieras como por la amenaza de perder cuota de mercado. Para los marxistas estas presiones impulsan a las empresas no solo a buscar la innovación en productos y procesos, sino también a profundizar en la explotación de la fuerza de trabajo y del medio ambiente, descargando

así los costes sobre la sociedad y aplastando a los competidores para asegurarse rentas de monopolio⁸.

Sin embargo, estas perspectivas contrapuestas comparten una premisa común. Ya consideremos los mercados como elegantes máquinas de optimización o despiadados motores de acumulación, se supone que subordinan todas las demás consideraciones a una lógica impulsada por los beneficios que además antepone la eficiencia. Pero este impulso no es intrínseco a los mercados considerados en sí mismos, sino que surge porque los participantes en los mercados capitalistas están motivados por la perspectiva de obtener una rentabilidad monetaria. Las empresas buscan beneficios y es esta orientación, impuesta por la estructura de la propiedad y la competencia, la que constituye el imperativo primordial. Para ir más allá de tal modelo, lo que hay que romper no es la utilización de los mercados, sino el vínculo existente entre la participación en el mercado y la búsqueda de beneficios⁹.

Para conseguirlo es necesario eliminar las presiones financieras que actualmente estructuran la toma de decisiones de las empresas. En una economía capitalista, los beneficios son tanto una fuente de ingresos para los propietarios como una importante fuente de fondos de inversión para las empresas. Las empresas se ven obligadas, pues, a generar, retener y también distribuir los excedentes entre sus propietarios y acreedores. Este imperativo de acumular es el que obliga a las empresas a privilegiar la minimización de costes y la maximización de ingresos por encima de otros objetivos. ¿Cómo pueden los mercados conservar su valor informativo y adaptativo sin reintroducir la dinámica coercitiva de la rentabilidad? Las empresas siguen teniendo que hacer frente a restricciones presupuestarias, ya que, de lo contrario, sus decisiones se vuelven arbitrarias. Pero esas restricciones deben configurar la actividad de las empresas sin exigir la acumulación de excedentes monetarios. Esto es precisamente lo que se pretende conseguir con la introducción de un sistema monetario digital dual.

⁸ Véase Anwar Shaikh, *Capitalism: Competition, Conflict, Crises*, Oxford, 2016; ed. cast.: *Capitalismo: competencia, conflicto y crisis*, Ciudad de México, 2023.

⁹ Oskar Lange, en su contribución al debate sobre el cálculo socialista, ofreció una forma de pensar sobre esto. Keynes también imaginó que el aparato productivo del capitalismo podría algún día liberarse de la motivación del beneficio, dejando intactos los mercados, pero separándolos de la acumulación. Véase A. Benanav, «Más allá del capitalismo – 1: Fundamentos para una economía multicriterio», cit.

Antes del auge del capitalismo moderno, el dinero no funcionaba como un medio único y universal. La mayoría de las sociedades mantenían múltiples monedas u objetos simbólicos similares a monedas, cada una adaptada a ámbitos específicos. La multiplicidad monetaria era, sin duda, una respuesta racional a la estructura diferenciada de las relaciones de intercambio. Una moneda podía utilizarse en los mercados locales, otra para el comercio a larga distancia y una tercera para ofrendas religiosas o impuestos. En África occidental circulaban simultáneamente conchas, varillas de latón y telas, cada una de las cuales correspondía a un tipo particular de transacción o relación social. Las tres funciones básicas del dinero moderno –unidad de cuenta, medio de intercambio y depósito de valor– se repartían entre estos símbolos objetuales. Las diferentes monedas eran también, por consiguiente, instrumentos de separación institucional, que mantenían la frontera entre ámbitos de la vida moralmente distintos¹⁰.

Solo con el auge del capitalismo el dinero se unificó cada vez más, tanto en su forma como en su función, como parte de un esfuerzo más amplio por generalizar la forma mercancía. No se trató de una inevitabilidad evolutiva, sino de un proyecto político e institucional. A medida que los Estados consolidaban su autoridad fiscal y los mercados capitalistas se expandían, los antiguos sistemas de monedas plurales se fueron desmantelando gradualmente. En los albores de la Europa moderna y de modo mucho más intenso durante el siglo XIX, los gobiernos nacionales trataron de imponer una moneda única de curso legal, respaldada por sistemas fiscales centralizados y aplicada mediante el derecho mercantil y la administración monetaria. Esta nueva forma de dinero se diseñó para ser universal en su alcance, abstracta en su forma e indiferente a su contexto: podía mediar en cualquier transacción, representar cualquier bien y vincular a cualquier parte, independientemente de la relación social o la posición moral. Su aparición coincidió con la expansión del trabajo asalariado y la mercantilización del tiempo, de la tierra y de la vida misma¹¹.

¹⁰ Respectivamente, Akinobu Kuroda, *A Global History of Money*, Londres, 2020; Jane Guyer, *Marginal Gains: Monetary Transactions in Atlantic Africa*, Chicago (IL), 2004; y Peter Spufford, *Money and Its Use in Medieval Europe*, Cambridge, 1988; ed. cast.: *Dinero y moneda en la Europa medieval*, Barcelona, 1991.

¹¹ Eric Helleiner, *The Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective*, Ithaca (NY), 2003; David Graeber, *Debt: The First 5,000 Years*, Brooklyn (NY), 2011; ed. cast.: *En deuda: una historia alternativa de la economía*, Barcelona, 2021.

En la Primera Parte de este ensayo describí cómo la Unión Soviética reintrodujo inadvertidamente la pluralidad monetaria al dividir su moneda nacional, el rublo, en dos circuitos distintos: uno para la producción y otro para el consumo. En el marco de la economía planificada, las empresas operaban íntegramente con rublos no monetarios, una unidad contable interna mediada por el Gosbank, que autorizaba la totalidad de las transacciones entre empresas y bloqueaba los flujos no autorizados. Por el contrario, los rublos en efectivo solo circulaban en la economía de consumo, entrando en la misma cuando se pagaban los salarios y saliendo cuando los hogares realizaban las compras correspondientes. Este cortafuegos institucional entre ambos circuitos no era una invención teórica, sino una solución práctica a la creciente complejidad de la economía planificada. Durante un tiempo, esta estructura dual hizo que la planificación centralizada fuera viable a gran escala, pero cuando las reformas de la Perestroika relajaron los controles financieros, la barrera se rompió. A finales de la década de 1980, la morosidad se disparó, los suministros fallaron y los flujos de materiales se volvieron imposibles de rastrear.

El sistema de CRÉDITOS y PUNTOS propuesto en este ensayo no supone una ruptura con la historia, sino por el contrario el retorno a algo que este sistema previo vislumbró, pero no pudo mantener. A diferencia del modelo soviético, este sistema parte de la premisa de que la coordinación económica requiere dos monedas distintas, cada una de ellas integrada en su propia lógica institucional y política. El modelo también se basa en el precedente histórico más profundo de la multiplicidad monetaria en el que diferentes símbolos monetarios gobernaban diferentes ámbitos: en nuestro caso, el consumo se organiza a través de CRÉDITOS, mientras que la producción se coordina a través de PUNTOS. Las empresas no reciben CRÉDITOS y no pueden gastarlos ni acumularlos. Las empresas que producen bienes y servicios para los consumidores reciben PUNTOS en proporción a la totalidad de los CRÉDITOS gastados por los consumidores en sus productos. Estos PUNTOS se obtienen de la parte del presupuesto social total asignada a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Los PUNTOS no son convertibles en CRÉDITOS y los CRÉDITOS no pueden utilizarse para adquirir PUNTOS. Esta separación estructural es lo que permite preservar la coordinación del mercado sin volver a un sistema impulsado por los beneficios¹².

¹² El modelo monetario dual desarrollado aquí también se inspira en la innovadora propuesta de Daniel Saros de un sistema digital de CRÉDITOS y PUNTOS presentado

Dado que los PUNTOS no pueden acumularse, transferirse ni transformarse en ganancias personales, las empresas no tienen ningún incentivo para gastar menos de lo presupuestado o para generar excedentes. Los PUNTOS no utilizados se deprecian y desaparecen tras un periodo determinado, lo que anima aún más a las empresas a asignar la totalidad de su presupuesto en cada ciclo para alcanzar sus objetivos de producción. Al mismo tiempo, las empresas no pueden utilizar los PUNTOS operativos que adquieren para financiar inversiones: las mejoras y ampliaciones de capacidad deben proponerse y aprobarse a través del sistema independiente de la Junta de Inversiones. El resultado es una clara división de funciones. Los CRÉDITOS apoyan el consumo; pueden transferirse de forma limitada entre individuos, pero se eliminan del sistema una vez gastados en empresas orientadas al consumidor¹³. Los PUNTOS financian los gastos operativos; circulan en la esfera de la producción durante un tiempo limitado, pero luego también se extinguen. Al impedir la acumulación de poder adquisitivo generalizado en cualquiera de los dos ámbitos, este sistema garantiza que las decisiones de producción sigan orientadas al cumplimiento de objetivos sociales y ecológicos en lugar de orientarse a la extracción de excedentes, lo cual se vuelve funcionalmente imposible.

Los intentos precedentes por separar los circuitos de producción y consumo se topaban con una importante debilidad estructural: carecían de un mecanismo duradero para hacer cumplir esta barrera. La separación dependía de decisiones administrativas, normas informales o

en *Information Technology and Socialist Construction: The End of Capital and the Transition to Socialism*, Nueva York, 2014. Saros propone un sistema monetario dual en el que los consumidores reciben CRÉDITOS basados en el trabajo para adquirir bienes, mientras que las empresas pujan por los insumos de producción utilizando PUNTOS asignados por la junta de planificación. Saros imagina la coordinación económica como un proceso que se repite una vez por ciclo: las empresas pujan por todos sus insumos en una subasta única y simultánea, asumiendo un conocimiento estático de las necesidades, capacidades y tecnologías. A diferencia del modelo de Saros, la presente propuesta emplea CRÉDITOS y PUNTOS en el seno de interacciones de mercado más tradicionales y descentralizadas, que se hallan estructuradas específicamente para eliminar la acumulación financiera y permitir así una producción multicriterio genuina.

¹³ Marx aborda una idea similar en *Capital*, vol. I, Londres, 1992, p. 188, nota al pie 1 [ed. cast.: *El capital*, Madrid, 2022] al referirse al concepto de Robert Owen sobre los certificados de trabajo, instrumentos similares a la moneda que, una vez gastados, dejan de circular. Marx compara estos certificados con las entradas de teatro, que se presentan al entrar y se retiran inmediatamente de la circulación. Véase Peter Hudis, *Marx's Concept of the Alternative to Capitalism*, Leiden, 2012.

segregación física, y cuando la presión aumentaba –a través de conversiones oportunistas, la escasez o los cambios en las políticas– las fugas se hacían inevitables. Lo que distingue al modelo actual es que aprende de estos fallos. No se basa únicamente en el mantenimiento de la disciplina a través de la burocracia, sino que utiliza la arquitectura digital para hacer que la separación sea aplicable por diseño. Los CRÉDITOS y los PUNTOS son legalmente distintos y digitalmente inconmensurables. Existen en circuitos separados, registrados en la Matriz de Datos, sin posibilidad de conversión. Así, la economía de los CRÉDITOS conserva una forma conocida de agencia económica –elegir cómo vivir– pero la sitúa en el seno de un sistema en el que, gracias a los servicios básicos universales y a la renta básica, nadie tiene que trabajar para sobrevivir y en el que la producción se organiza en torno a la búsqueda de fines plurales¹⁴. Los presupuestos de CRÉDITOS deben reponerse cada mes para mantener el poder adquisitivo.

Los PUNTOS también se introducen de nuevo en el sistema al comienzo de cada ciclo trimestral de producción. El Demos decide la estructura general de la economía reevaluando periódicamente qué proporción del total de PUNTOS disponibles debe asignarse a cada uno de los cinco ámbitos de la economía: (i) provisión pública universal; (ii) provisión para el consumo individual; (iii) provisión en el ámbito asociativo, que incluye las Asociaciones Técnicas y las Asociaciones Libres autodeterminadas; (iv) el ámbito administrativo, que incluye las Juntas de Inversión, los Comités de Coordinación, los Organismos de Evaluación y los Institutos de Investigación, que contribuyen a configurar el sistema en su conjunto; y (v) el ámbito de la provisión futura, que asigna inversiones para el desarrollo transformador de infraestructuras y tecnología. Los individuos y las asociaciones pueden solicitar a la Matriz de Datos que genere opciones de planes como proponía Neurath, que muestren los resultados que producirían diferentes asignaciones de PUNTOS¹⁵. Por ejemplo, el Demos podría decidir asignar el 25 por 100 de los PUNTOS a la provisión pública, el 25 por 100 a la producción para el consumo individual, el 20 por 100 al ámbito asociativo, el 15 por 100 a la administración y

¹⁴ Para una propuesta contemporánea en esta línea, véase Saule Omarova, «The People's Ledger: How to Democratize Money and Finance the Economy», *Vanderbilt Law Review*, vol. 74, núm. 5, 2021, pp. 1231-1309.

¹⁵ Para consultar el análisis de Neurath sobre las estadísticas pictográficas, véanse los textos recopilados en el capítulo «From "Vienna Method" to "ISOTYPE"», en Otto Neurath, *Empiricism and Sociology*, Marie Neurath y Robert Cohen (eds.), Boston (MA), 1973, pp. 214-248.

el 15 por 100 al desarrollo futuro. La importancia no radica tanto en las proporciones en sí mismas como en el hecho de que pueden cambiar a través de la controversia política sobre cómo se definen las necesidades y las prioridades, basándose en las previsiones y los escenarios elaborados por la Matriz de Datos.

Estabilidad permanente

Una vez que las empresas reciben sus presupuestos de PUNTOS operativos, son libres de asignarlos para cubrir los gastos de alquiler de los factores de producción (tierra, fuerza de trabajo, bienes de capital) y comprar insumos intermedios a otros productores¹⁶. Los PUNTOS utilizados para los gastos de alquiler se eliminan y se retiran de la circulación, mientras que los gastados en insumos intermedios pasan a través de la cadena de suministro. Todos los PUNTOS acaban saliendo del sistema, ya sea mediante el pago de alquileres o al caducar con el final del ciclo de producción por lo cual las empresas no tienen ningún incentivo para acumularlos. Los ciclos de producción se solapan y se inyectan nuevos PUNTOS al mismo ritmo que los antiguos salen del sistema, lo que garantiza una circulación continua. Al ajustar el flujo de nuevos PUNTOS para que se adecue a los recursos y a la capacidad productiva, el sistema garantiza que la actividad económica se mantenga equilibrada, evitando tanto el exceso inflacionario como la infrautilización de los recursos.

Esta estructura elimina la necesidad de creación de dinero para pagar impuestos o mediante el uso del endeudamiento. En las economías capitalistas, los bienes y servicios públicos parecen estar «financiados» mediante la extracción de ingresos de la actividad privada, lo que crea la ilusión de que los impuestos son necesarios para mantener los servicios

¹⁶ La tierra en este sistema es de propiedad pública y el espacio comercial se alquila a la Autoridad Territorial regional. La fuerza de trabajo, como hemos visto, se contrata a las Asociaciones Técnicas pertinentes. Los precios de alquiler de la tierra y de la fuerza de trabajo fluctúan en función de la oferta y la demanda, pero, lo que es más importante, los precios de alquiler de la fuerza de trabajo denominados en PUNTOS no afectan directamente a los salarios denominados en CRÉDITOS por el trabajo realizado; ambos están estructuralmente separados. La necesidad de esta separación se analiza de forma muy detallada en Michael Albert y Robin Hahnel, *The Political Economy of Participatory Economics*, Princeton (NJ), 1991. Los gastos de alquiler de los bienes de capital (maquinaria, edificios, equipos, *hardware*, *software*) se fijan como un porcentaje del precio de compra, depreciado a lo largo del tiempo según métodos geométricos estándar. Una vez más, una vez que los PUNTOS se han utilizado para los gastos de alquiler, se eliminan del sistema.

y las infraestructuras esenciales. En realidad, los servicios públicos existen, porque la sociedad decide asignarles mano de obra, materiales y capital, y no porque las transferencias financieras los hagan posibles. La economía multicriterio lo deja claro al asignar directamente PUNTOS al ámbito de la provisión pública. Otra diferencia: en el capitalismo, el ahorro parece necesario para financiar inversiones futuras, mientras que aquí la inversión no está limitada por excedentes financieros previos; reservar PUNTOS en cada ciclo crea el «ahorro» necesario para la inversión socialmente deseada.

El sistema de PUNTOS-CRÉDITOS también tiene profundas implicaciones para la lógica de la inversión. En las economías capitalistas, la inversión solo se produce cuando las empresas esperan beneficios futuros, lo que da lugar a oleadas de expansión y contracción. Cuando los beneficios previstos son elevados, la inversión se dispara; cuando las expectativas disminuyen, las empresas la recortan, lo cual conduce al estancamiento. Estos altibajos se ven agravados por la dinámica del crédito, ya que la especulación y las fluctuaciones de los tipos de interés determinan la disponibilidad de fondos. En la economía multicriterio, la inversión sigue un patrón diferente. En cada ciclo de producción se reserva automáticamente una parte fija de PUNTOS que se utiliza para financiar los proyectos que el Demos –a escala local, regional o nacional– ha decidido que son más importantes. Estos recursos de inversión digitales no son acumulados por ningún individuo o entidad; no generan ningún rendimiento financiero. Por el contrario, se crean colectivamente y se asignan democráticamente en función de una variedad de fines diferentes. Dado que las inversiones están desvinculadas de la rentabilidad, pueden destinarse a lo que la sociedad considere más valioso¹⁷.

El resultado es una forma de estabilidad macroeconómica permanente que el capitalismo nunca ha logrado. Dado que el proceso de inversión no está controlado por el sector privado ni se limita a las ganancias de eficiencia, la economía ya no sufre auges especulativos ni recesiones,

¹⁷ Presumo que estamos utilizando este modelo para construir una economía en gran medida poscrecimiento en la que la cantidad total de bienes y servicios producidos se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. Tras un periodo inicial de transición, que implicaría ajustes en el tamaño y la forma de la economía, la inversión se dirigiría en gran medida a efectuar mejoras cualitativas en la producción. Sin embargo, el modelo es estructuralmente compatible tanto con el crecimiento como con el decrecimiento: lo que importa no es el ritmo de expansión, sino las prioridades incorporadas en la asignación de la inversión.

lo cual no significa inercia, sino simplemente que las empresas pueden operar desde una plataforma estable, centrándose en mejorar lo que hacen. En lugar de aumentos y caídas repentinas de la inversión, la economía experimenta oleadas de inversión superpuestas, que cambian con los avances tecnológicos y la evolución de las prioridades sociales. En ocasiones, la inversión puede centrarse en las ganancias de eficiencia, cuando los nuevos métodos permiten mejoras significativas en los procesos de producción. En otros, puede tener como objetivo reducir las horas de trabajo, mejorar la infraestructura de cuidados, aumentar la resiliencia o apoyar la vida comunitaria. Cuando una vía de mejora comienza a saturarse o a ser menos urgente, la inversión puede fluir hacia otros ámbitos. Dado que los PUNTOS no se pueden guardar para gastarlos más adelante –funcionan como medio de intercambio, pero no como reserva de valor–, su volumen total se puede modular en cada ciclo para mantener el equilibrio general entre la oferta y la demanda. Es posible que sigan surgiendo puntos críticos y cuellos de botella a escala local, pero estos pueden supervisarse y abordarse a medida que se produzcan. Esta coherencia no se logra mediante la planificación desde arriba o la disciplina del mercado, sino a través de una toma de decisiones estructurada en la que la acción descentralizada se alinea con las prioridades democráticas. En una sociedad multicriterio, la estabilidad macroeconómica básica está integrada en la estructura del sistema.

3. LA MATRIZ DE DATOS

Los modelos anteriores de socialismo cibernético imaginaban que la centralización de una gran cantidad de datos económicos podría optimizar la totalidad de la economía. Los planificadores introducirían los resultados deseados, los insumos necesarios y los recursos disponibles en un algoritmo central para producir un plan integral. Sin embargo, incluso si se podía elaborar un plan coherente, estos esfuerzos fracasaban sistemáticamente en la práctica. Las empresas carecían de la flexibilidad necesaria para cambiar de proveedores o probar nuevas ideas. El resultado fueron problemas persistentes de calidad y escasez¹⁸. En la economía multicriterio, ningún algoritmo ni autoridad central dicta los detalles de la producción. Por el contrario, la función de la Matriz de Datos es facilitar la coordinación al hacer visibles las consecuencias más amplias

¹⁸ Véase la exposición sobre la experiencia del Gosplan en A. Benanav, «Más allá del capitalismo — I: Fundamentos para una economía multicriterio», cit.

de las decisiones de producción individuales. Las empresas operan con libros abiertos y los intercambios basados en PUNTOS pueden auditarse en cualquier momento. Dado que todas las transacciones se registran y pueden auditarse, las irregularidades pueden señalarse automáticamente. Los algoritmos de aprendizaje automático escanean los patrones de gasto de PUNTOS, así como el gasto de CRÉDITOS anonimizado, para generar una potente infraestructura de previsión¹⁹. Las previsiones no nos muestran lo que debe suceder, sino lo que podría suceder y lo que, mediante el consabido esfuerzo colectivo, podríamos decidir cambiar. No establecen las reglas, sino que ofrecen recomendaciones generadas automáticamente a través de análisis digitales de datos y tendencias²⁰. Los agentes económicos pueden optar por confiar ampliamente en esta orientación automatizada, racionalizando sus decisiones operativas o pueden ignorarla deliberadamente. El sistema de la Matriz de Datos anticipa los efectos en cadena, que tendrían determinadas decisiones, pero respeta el criterio de las personas, dentro de las limitaciones del mundo real.

Este modelo de la previsión basada en los *big data* difiere fundamentalmente de cómo lo utilizan hoy en día las grandes empresas. Amazon y Google utilizan principalmente sus datos propios, que protegen celosamente, para identificar nichos rentables para nuevos productos; la previsión se orienta hacia la maximización de los beneficios²¹. Por el contrario, el sistema aquí descrito trata la previsión como un instrumento de concienciación democrática, que ayuda a abrir el futuro en tanto que campo de acción. Aquí podemos imaginar una interfaz similar

¹⁹ Max Grünberg analiza el potencial de las herramientas de planificación algorítmica para pronosticar y responder a las tendencias emergentes en «The Planning Daemon: Future Desire and Communal Production», *Historical Materialism*, vol. 31, núm. 4, 2023.

²⁰ Por ejemplo, las empresas podrían recibir una simple orientación operativa: «Las previsiones actuales indican que el proveedor X se enfrenta a un aumento de los pedidos; considere la posibilidad de cambiar temporalmente al proveedor Y para facilitar la coordinación». Otras podrían centrarse en los resultados ecológicos —«Cambiar al proveedor Z reduciría su huella de carbono el 5 por 100»— o en el bienestar de los trabajadores: «Las empresas que utilizan esta herramienta ergonómica informan de mejoras cuantificables en el confort de los trabajadores».

²¹ Véase Andrew McAfee *et al.*, «Big Data: The Management Revolution», *Harvard Business Review*, vol. 90, núm. 10, 2012, pp. 60-68; Nick Srnicek, *Platform Capitalism*, Cambridge, 2017 [ed. cast.: *Capitalismo de plataformas*, Buenos Aires, 2018]; Viktor Mayer-Schönberger y Thomas Ramge, *Reinventing Capitalism in the Age of Big Data*, Boston (MA) 2018 [ed. cast.: *La reinención de la economía: el capitalismo en la era del Big Data*, Madrid, 2019]; Philipp Staab, *Markets and Power in Digital Capitalism*, Manchester, 2024.

a ChatGPT, capaz de convertir vastas matrices estadísticas en narrativas y visualizaciones digeribles para su consulta pública. Un periodista podría preguntarse si el aumento de la demanda de aparatos electrónicos está provocando un mayor volumen de residuos electrónicos y ver adónde van a parar esos residuos. Una asociación comunitaria podría preguntarse qué pasaría si la inversión se redirigiera hacia modelos de vivienda pública más densos. La previsión se convierte en política; muestra claramente lo que las opciones existentes o alternativas podrían lograr o destruir.

Este enorme aparato informativo se halla institucionalmente abierto y se gobierna democráticamente. La Matriz de Datos no es una agencia tecnocrática aislada. Por el contrario, combina la experiencia de estadísticos profesionales y científicos de datos con la aportación y participación democrática directa de grupos de trabajadores, movimientos sociales y organizaciones comunitarias. Los ciudadanos y ciudadanas pueden realizar sus propias consultas, generando informes hipotéticos o contrafactuales. Se debaten, revisan y cuestionan nuevas métricas, lo que da forma a las metodologías de recopilación e interpretación de datos. Una asociación de cuidadores, por ejemplo, podría rechazar los estudios estándar de tiempo y movimiento centrados en la productividad, abogando en su lugar por registros etnográficos y entrevistas colaborativas, que capturen mejor las realidades matizadas de su trabajo. Aquí, la democracia opera a escala epistémica, determinando colectivamente cómo y qué sabemos sobre nuestras condiciones. El objetivo es un sistema estadístico capaz de aprender continuamente a lo largo de una amplia variedad de dimensiones sociales y ecológicas²².

No existe una única métrica que pueda resumir esta diversidad; por el contrario, el sistema estadístico debe mantener indicadores paralelos, haciendo visibles las tensiones y las compensaciones recíprocas registradas entre los diferentes criterios²³. Mientras que la gestión

²² Véase, por ejemplo, Alan Irwin, *Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable Development*, Londres, 1995; Jason Corburn, *Street Science: Community Knowledge and Environmental Health Justice*, Cambridge (MA), 2005; Rick Bonney *et al.*, «Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science and Public Participation», *BioScience*, vol. 59, núm. 11, 2009.

²³ La toma de decisiones democrática no tiene por qué resultar abrumadora ante este aparato estadístico ampliado, ya que los proyectos o decisiones políticas específicos siempre movilizan solo un subconjunto relevante de indicadores, comparando opciones y escenarios claramente definidos.

macroeconómica orientada a los beneficios se basa en un pequeño conjunto de indicadores agregados –PIB, productividad, empleo, inflación–, una sociedad multicriterio necesitará datos anonimizados sobre muchos más factores²⁴. La Matriz de Datos deberá abarcar no solo el gasto de CRÉDITOS y PUNTOS, sino también indicadores sociales, el seguimiento de las dinámicas de la comunidad y del lugar de trabajo, así como mediciones del bienestar subjetivo. La contabilidad biofísica registrará los flujos totales de energía, materias primas, emisiones y residuos, organizando estos datos en matrices de insumos y productos, que podrían proporcionar una visibilidad en tiempo real de las condiciones ecológicas –ciclos del carbono, tasas de extracción de recursos en relación con la regeneración de los mismos, pérdidas de biodiversidad, uso del agua, agotamiento del suelo y niveles de contaminación– revelando así la proximidad de la economía a los límites críticos del planeta. A continuación, se pueden modelar diferentes escenarios de producción y consumo dentro de estas limitaciones, aclarando las vías disponibles y las consecuencias sociales o ecológicas de seguirlos²⁵. Los sistemas de la Matriz de Datos serán adaptables y responderán a las preocupaciones emergentes; por ejemplo, una coalición que represente a las personas con diversidad funcional podría hacer un seguimiento de la accesibilidad de los espacios públicos, traduciendo la experiencia vivida en datos procesables.

Al vincular los datos de consumo basados en CRÉDITOS y los datos de producción basados en PUNTOS con esta matriz computacional-comunicativa expansiva y gobernada democráticamente, será posible lograr un grado mucho mayor de estabilidad macroeconómica, biofísica y social. Los patrones cambiantes de sobreconsumo ecológico, de agotamiento laboral, de aislamiento social o de angustia psicológica se hacen visibles en tiempo real, lo cual determina las decisiones sobre dónde invertir los recursos. Pero es igualmente importante que informen directamente

²⁴ Sobre las críticas dirigidas al PIB y a los indicadores macroeconómicos convencionales, véase Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, *Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up*, Nueva York, 2010; Naciones Unidas [ed. cast.: *Medir nuestras vidas: las limitaciones del PIB como indicador de progreso*, Barcelona, 2013]; *The Sustainable Development Goals Report*, Nueva York, varios años; ed. cast.: *Informe de los objetivos de desarrollo sostenible*, Nueva York, varios años.

²⁵ Véase Jakob Heyer y Walther Zeug, «Ökobilanz und kybernetische Wirtschaftsplanung», *PROKLA*, vol. 54, núm. 2, 2024, pp. 267-286; Walther Zeug et al., «A Framework for Implementing Holistic and Integrated Life Cycle Sustainability Assessment of Regional Bioeconomy», *The International Journal of Life Cycle Assessment*, vol. 26, núm. 10, 2021, pp. 1998-2023.

las decisiones operativas de las empresas. En resumen, la economía se vuelve autorreflexiva, no solo estable en su conjunto, sino también receptiva a la multiplicidad de valores y condiciones que debe equilibrar continuamente. El resultado es un sistema capaz de sostener lo que los diseños anteriores solo aproximaban: una forma sostenible y plural de coordinación en la que los diferentes ámbitos de valor –el rendimiento económico, la responsabilidad ecológica y el objetivo social– permanecen vinculados, pero sin ser recíprocamente convertibles.

4. LA PROVISIÓN UNIVERSAL

Una economía multicriterio comienza con un compromiso elemental: que todo el mundo tenga acceso garantizado a los bienes y servicios, que necesita para participar plenamente en la sociedad. La ampliación de la provisión pública ha sido un objetivo fundamental para la izquierda –socialista, socialdemócrata y keynesiana– durante más de un siglo. En Estados Unidos, estos programas siguieron siendo limitados; las políticas sociales se racializaron, se supeditaron a los ingresos y se dirigieron a determinados grupos muy delimitados. En Europa, los gobiernos democristianos construyeron sistemas más amplios, aunque siempre diseñados para fortalecer los roles familiares tradicionales. En Gran Bretaña, el gobierno de Attlee dio los primeros pasos hacia un modelo más universal, también basado en el ideal del varón como sostén de la familia. Los socialdemócratas de los países nórdicos fueron más allá y crearon una amplia oferta de educación, sanidad, vivienda, cuidado infantil y transporte. Sin embargo, incluso en sus formas más generosas, estas instituciones siguieron siendo parciales y controvertidas, construidas dentro de sistemas capitalistas, que veían con malos ojos el gasto público; la mayoría de ellas quedaron vaciadas de contenido desde principios de la década de 1980.

La economía multicriterio tendrá como objetivo cumplir estas promesas inconclusas, haciendo que el acceso a los bienes y servicios esenciales constituya el fundamento de la sociedad, de modo que las preocupaciones por la supervivencia puedan finalmente desaparecer. En este sistema, la provisión pública abarca no solo la vivienda, la salud, la atención, la educación, las bibliotecas y los sistemas de transporte, sino también los teléfonos móviles, el acceso a Internet, los comedores de barrio, el apoyo a la crianza de los hijos, las lavanderías y la ayuda a las personas

mayores o con diversidad funcional. La infraestructura cultural y cívica es igualmente amplia: acceso gratuito a la práctica totalidad de los libros, películas, música y noticias; estudios de producción de audio y vídeo; plataformas multimedia de todo tipo; espacios de trabajo digitales, gimnasios, piscinas, rutas de senderismo, saunas, jardines y espacios para celebraciones, duelo y rituales, todos ellos mantenidos públicamente²⁶.

Uno de los efectos de la ampliación de la provisión pública de estos servicios sería la remodelación positiva de la vida doméstica. Bajo el capitalismo, gran parte del trabajo necesario para la supervivencia –cocinar, limpiar, cuidar de los demás– se ha privatizado, se ha descargado en los hogares y, dentro de ellos, de manera desproporcionada en las mujeres; cuando estas necesidades se satisfacen a través del mercado, los resultados son dispersos, caros y desiguales. La economía multicriterio aborda el cuidado como una cuestión de interés colectivo, que se satisface mediante servicios universales y financiación pública para la asistencia domiciliaria, permitiendo a las personas elegir si quieren vivir en régimen de convivencia o solas, sin que esas elecciones sean dictadas por la precariedad económica o la desigualdad de las cargas. La seguridad que proporcionan los servicios básicos universales no es solo una cuestión de equidad y compasión, sino también una condición previa para poder participar en una sociedad organizada en torno a decisiones compartidas sobre objetivos contrapuestos. Cuando las personas están estresadas por pagar el alquiler, encontrar cuidados o gestionar una enfermedad crónica, su mundo se estrecha²⁷. La inseguridad económica obliga a las personas a sacrificar el futuro por el presente, lo que limita su capacidad

²⁶ Sobre los servicios públicos como infraestructura de la vida democrática, véase Eric Klinenberg, *Palaces for the People: How to Build a More Equal and United Society*, Nueva York, 2018 [ed. cast.: *Palacios del pueblo: Políticas para una sociedad más igualitaria*, Madrid, 2021]; Foundational Economy Collective, *The Foundational Economy*, Manchester, 2018 [ed. cast.: *Economía fundamental: la infraestructura de la vida cotidiana*, Madrid, 2020]; Anna Coote y Andrew Percy, *The Case for Universal Basic Services*, Cambridge, 2020.

²⁷ Sobre cómo la inseguridad material fractura las mentes, estrecha los horizontes y corroe la confianza, véase Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir, *Scarcity: Why Having Too Little Means So Much*, Nueva York, 2013; Richard Sennett, *The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*, Nueva York, 1998 [ed. cast.: *La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*, Barcelona, 2006]; Robert Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Nueva York, 2000 [ed. cast.: *Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana*, Barcelona, 2002]; Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford, 1999; ed. cast.: *Desarrollo y libertad*, Barcelona, 2000.

y voluntad de participar en estructuras dotadas de visión de futuro. La garantía de una provisión de buena calidad ayuda a despejar la mente.

El capitalismo depende de la provisión pública para suministrar una fuerza de trabajo alfabetizada y en buen estado físico, así como de la infraestructura urbana, la policía, el poder judicial, etcétera. Pero, al mismo tiempo, los empleadores se aprovechan de la inseguridad económica para mantener la disciplina en el lugar de trabajo y el control sobre su mano de obra. Los servicios universales hacen que la fuerza de trabajo sea menos flexible y amenazan el control del capital sobre las condiciones de empleo. Mientras tanto, una dinámica estructural más profunda ha intensificado este problema. Servicios como la asistencia, la salud y la educación absorben una parte cada vez mayor del empleo total en parte porque el crecimiento de la productividad en estos sectores siempre será relativamente bajo²⁸. La contabilidad capitalista trata estos sectores intensivos en mano de obra como sumideros de costes, ineficientes y que necesitan recortes. A medida que crece la participación de los servicios en la economía, la austeridad se intensifica y las necesidades esenciales quedan insatisfechas, ya que el coste de satisfacerlas restaría gasto al consumo privado.

En un sistema multicriterio, el papel de los servicios esenciales podrá ampliarse mucho más. Una sociedad socialista abarcará sin duda una gran economía de servicios, ya que se organizará en torno a la satisfacción de una gama más amplia de necesidades sociales y psicológicas. Sectores como el trabajo asistencial, la educación, la salud y el ocio seguirán caracterizándose por un bajo crecimiento de la productividad, lo que requerirá una gran parte de la capacidad de la sociedad. Sin embargo, son precisamente estas áreas las que pueden obtener los mayores rendimientos de la inversión multicriterio, al enriquecer su valor social y

²⁸ Este fenómeno se conoce como la enfermedad de los costes de Baumol: en los servicios intensivos en trabajo, los salarios deben seguir aumentando en consonancia con el resto de la economía para atraer a los trabajadores, aunque la producción por trabajador crezca lentamente, si es que lo hace. Véase William Baumol y William Bowen, «On the Performing Arts: The Anatomy of Their Economic Problems», *American Economic Review*, vol. 55, núm. 2, 1965. Sobre cómo esta dinámica contribuye a las tendencias a largo plazo de desindustrialización, véase Robert Rowthorn y Ramana Ramaswamy, «Growth, Trade and Deindustrialization», *IMF Staff Papers*, vol. 46, núm. 1, 1999. Véase también Dietrich Vollrath, *Fully Grown: Why a Stagnant Economy Is a Sign of Success*, Chicago (IL), 2020; Aaron Benanav, *Automation and the Future of Work*, Londres y Nueva York, 2020 [ed. cast.: *La automatización y el futuro del trabajo*, Madrid, 2021] y «¿Un exceso de capacidad devorador?», *NLR* 140/141, mayo-agosto de 2023.

mejorar sus condiciones de trabajo. Los servicios públicos no tienen por qué limitarse a proporcionar lo básico; a medida que el acceso universal se convierte en la norma, pueden convertirse en lugares de aspiración y disfrute colectivos. Las viviendas públicas pueden ser bonitas. Las piscinas, las bibliotecas, los sistemas de transporte y los centros de asistencia pueden mantenerse al más alto nivel²⁹.

Las empresas que producen bienes y servicios para la provisión pública –clínicas, sistemas de transporte, escuelas– se financian en PUNTOS per cápita en relación con la población a la que prestan sus servicios. Al igual que todas las empresas de la economía multicriterio, son creadas por la Junta de Inversiones correspondiente, evaluadas por Comités de Evaluación y de propiedad pública, sin ánimo de lucro y gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras. Los usuarios de los servicios también participan en las evaluaciones, votando como comunidades constituidas políticamente para dar forma a los sistemas de los que dependen. Pueden recurrir a los recursos de la Matriz de Datos para aclarar las implicaciones de las diferentes posibilidades de provisión, proponer compensaciones recíprocas y supervisar los resultados. Los modelos empresariales pueden seguir siendo diversos, incluso dentro de una misma comunidad –por ejemplo, escuelas infantiles con diferentes metodologías– siempre que la infraestructura subyacente sea universal y cuente con un apoyo equitativo. La financiación puede depender de la matriculación o del uso, mientras que las estructuras democráticas garantizan que el sistema permanezca abierto a la revisión, la impugnación y la mejora continua.

¿Hasta dónde debe llegar la provisión pública? ¿Todo debería ser gratuito en el punto de uso? Algunos bienes y servicios son demasiado variados, dependientes del gusto personal o específicos de un contexto como para organizarse a través de sistemas de provisión universal. Tiene más sentido acceder a ellos a través de los mercados, no necesariamente porque se trate de lujos, sino porque su valor reside en permitir la elección y expresar la diferencia: restaurantes, ropa, peluquería, cosméticos,

²⁹ Las constricciones ecológicas pueden requerir una reducción de la producción intensiva en recursos, pero una sociedad que consume menos bienes materiales puede vivir mejor, si invierte en actividades de servicios de bajo impacto, que mejoren la vida en múltiples dimensiones. Véase Kristin Ross, *Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune*, Londres y Nueva York, 2015 [ed. cast.: *Lujo comunal: el imaginario político de la Comuna de París*, Madrid, 2016]; Friends of the Classless Society, «Contours of the World Commune», *Endnotes*, vol. 5, 2019.

muebles, vacaciones, cuidado de mascotas, formas de entretenimiento. En estos ámbitos, los mercados preservan la diversidad en lugar de socavarla, permitiendo a las personas buscar la novedad o forjar su identidad de formas que la provisión universal no puede igualar fácilmente. Una renta básica limitada, pero de libre uso, ayuda a respaldar el carácter personal de este tipo de consumo, complementada con ingresos adicionales procedentes de los salarios del trabajo³⁰.

Seguirá habiendo cierto grado de desigualdad de ingresos, ya que algunos trabajos exigentes –cuidados nocturnos, transporte de larga distancia, cirugía especializada, soldadura submarina– requerirán una mayor remuneración para reflejar sus cargas particulares. En la economía actual, la capacidad de consumir más y trabajar menos suele estar reservada a quienes ya poseen una inmensa riqueza o a quienes realizan trabajos de dudoso valor social –especular con valores financieros o maximizar la participación en línea– en lugar de a quienes realizan tareas esenciales pero arduas. Una economía multicriterio cambia ese patrón, permitiendo una distribución más justa del esfuerzo y la recompensa basada en negociaciones entre Asociaciones Técnicas. Es fundamental que los ingresos más altos ya no se traduzcan en un mayor peso social. Debido a la separación entre PUNTOS y CRÉDITOS, las personas no pueden utilizar sus ingresos más altos devengados en concepto de CRÉDITOS para acumular capital o para contratar a grupos de presión para influir en las decisiones colectivas. En una economía multicriterio, el objetivo no es eliminar toda la desigualdad económica, sino garantizar que las diferencias de ingresos entre las personas no se conviertan en diferencias en cuanto a su libertad.

Este mismo principio se aplica a escala colectiva. En el capitalismo, la división de recursos entre los servicios públicos universales y el gasto discrecional individual está sistemáticamente sesgada. La provisión

³⁰ Véase Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght, *Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*, Cambridge (MA), 2017 [ed. cast.: *Ingreso básico: una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata*, Ciudad de México, 2018]; Guy Standing, *Basic Income: And How We Can Make It Happen*, Londres, 2017 [ed. cast.: *Renta básica: un derecho para todos y para siempre*, Barcelona, 2018]; Erik Olin Wright, *How to Be an Anti-Capitalist in the 21st Century*, Londres, 2019 [ed. cast.: *Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI*, Madrid, 2020]. En el capítulo 5 de *La automatización y el futuro del trabajo* critiqué la idea de que una renta básica pudiera servir como solución milagrosa para los problemas de las sociedades capitalistas tardías, cada vez más estancadas. Pero esa crítica no resta importancia al papel que podrían desempeñar esas políticas en un futuro emancipado en el que la renta básica podría apoyar la autonomía y permitir la elección dentro de un sistema reinventado de provisión universal.

pública se trata como un coste que hay que minimizar, mientras que el crecimiento del consumo privado se presenta como el objetivo último. Una economía multicriterio redibuja esta línea mediante la toma de decisiones democráticas sobre cuánta provisión debe garantizarse a todos y qué debe seguir siendo responsabilidad individual. No se trata de un problema técnico que pueda optimizarse mediante un ordenador o externalizarse a expertos. Es una cuestión política, determinada por diferentes ideas sobre las necesidades y las obligaciones. Lo que se considera una necesidad no es algo fijo; las necesidades se definen histórica y socialmente y están determinadas por normas cambiantes, por las expectativas en evolución y por la lucha colectiva³¹. La forma en que la sociedad traza esta línea condiciona el tipo de decisiones vitales, que los individuos pueden tomar de forma realista.

Siempre que se garanticen las necesidades básicas y que las diferencias de ingresos sigan siendo modestas, los mercados pueden ayudar a organizar las compensaciones de la vida personal en muchas dimensiones. Algunos pueden optar por trabajar menos y tener más tiempo libre; otros pueden trabajar más y gastar más en viajes, aficiones o comodidades para el hogar. Dentro de esta estructura más equitativa, los individuos seguirán teniendo que tomar decisiones personales difíciles, equilibrando objetivos inconmensurables: autonomía, conexión, estabilidad, logros, ocio, crecimiento personal. Una economía multicriterio no elimina las difíciles decisiones que las personas tienen que tomar, pero garantiza que al tomarlas cuenten con una sólida base de apoyo social.

5. EMPRESAS GESTIONADAS POR LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

En una economía multicriterio, las empresas operan con autonomía, pero no con impunidad. Cada empresa se establece mediante una asignación inicial de PUNTOS por parte de una Junta de Inversiones sectorial y sigue

³¹ Sobre la política de las necesidades, véase Agnes Heller, *The Theory of Need in Marx*, Londres, 1976 [ed. cast.: *Teoría de las necesidades en Marx*, Barcelona, 1998]; Kate Soper, *On Human Needs*, Brighton, 1981; Len Doyal e Ian Gough, «A Theory of Human Needs», *Critical Social Policy*, vol. 4, núm. 10, 1984; Nancy Fraser, «Social Justice in the Age of Identity Politics», en Nancy Fraser y Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, Londres y Nueva York, 2003, cap. 1; ed. cast.: *¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico*, Madrid, 2006.

siendo responsable ante la misma a lo largo del tiempo. La empresa pertenece a las personas que trabajan en ella, pero no en un sentido capitalista; los trabajadores no pueden comprar ni vender los activos productivos de la empresa, ni obtener ingresos de sus ganancias residuales. Por el contrario, la propiedad adopta la forma de autogobierno colectivo: los trabajadores ejercen autoridad sobre las decisiones internas, seleccionando los métodos de producción, estableciendo prioridades y gestionando las compensaciones recíprocas a la de atender a objetivos contrapuestos. Las empresas no pueden ampliar unilateralmente su capacidad productiva, porque para ello se requiere la aprobación de la Junta de Inversiones, pero conservan la discreción sobre cómo operar dentro de una escala determinada. Pueden cambiar de proveedores, introducir nuevos procesos, revisar los resultados y devolver los recursos no utilizados a la economía general. Para proteger esta autonomía, las empresas gozan de sólidos derechos procesales. Si consideran que se les trata de forma injusta, pueden recurrir a un poder judicial independiente facultado para conocer y resolver tales reclamaciones.

La autonomía de las empresas no es un cheque en blanco. Está condicionada al cumplimiento de tres objetivos interrelacionados. El primero es equilibrar las entradas y salidas de PUNTOS a lo largo del tiempo, de modo que la empresa utilice su presupuesto de PUNTOS de manera eficaz sin acumular excedentes ni incurrir en déficits crónicos. En segundo lugar, la empresa se propone mantener un buen nivel de utilización de la capacidad, garantizando que los recursos no se despilfarran ni se utilicen más allá de sus límites. En tercer lugar, se espera que la empresa cumpla las normas multicriterio básicas en materia de rendimiento social, medioambiental y laboral, según lo determine la Junta de Inversiones. En este contexto, la fijación de precios por parte de la empresa es un ejercicio de juicio: debe reflejar su estructura de costes real, su demanda prevista y los objetivos sociales más amplios a los que pretende atender³².

³² Los precios en los mercados de PUNTOS no se determinan mecánicamente por la oferta y la demanda, sino que los fijan los propios productores razón por la cual son «precios administrados» en sentido estricto. De hecho, la mayoría de los precios son fijados de antemano por los productores dominantes en las economías capitalistas actuales, por ejemplo, para los productos alimenticios, la electrónica de consumo, los automóviles, etcétera. En un sistema multicriterio, el poder de fijación de precios se redistribuye: las Juntas de Inversión regulan la expansión de la capacidad, configurando el panorama competitivo, al tiempo que permiten a las empresas fijar los precios dentro de parámetros conocidos y estables. Sobre los precios administrados, véase Frederic Lee, *Post-Keynesian Price Theory*, Cambridge, 1998, así como *Microeconomic Theory: A Heterodox Approach*, Londres, 2018. Para

Liberada de la necesidad imperiosa de generar beneficios, el presupuesto y las prácticas de trabajo de la empresa pueden contribuir a apoyar una amplia gama de transformaciones: la restauración ecológica, nuevas formas de movilidad, la mejora de la calidad de los productos, la producción de bienes duraderos, el rediseño del lugar de trabajo, bienestar de la comunidad, regeneración del espacio público. Estos beneficios se miden en especie, es decir, en diferentes unidades; sus resultados no pueden reducirse a una única métrica y no pueden clasificarse en una escala común. Como resultado, no existe un método de producción óptimo. Cada uno de ellos implica compromisos y la determinación del mejor equilibrio posible entre las diversas prioridades en disputa requiere un juicio continuo y contextualizado. Los propios trabajadores y trabajadoras poseen los conocimientos locales y específicos necesarios para evaluar estas compensaciones recíprocas insertas en su contexto y tienen el derecho de decidir colectivamente cómo priorizar entre los objetivos que persigue su empresa. Estas decisiones son necesariamente provisionales y están sujetas a debate en las Juntas de Inversión, donde las empresas de cada sector aprenden unas de otras y defienden su forma de resolver las compensaciones recíprocas entre los distintos objetivos perseguidos en liza.

Al mismo tiempo, el rendimiento de cada empresa individual es evaluado por un Comité de Evaluación compuesto por las partes interesadas en la misma: trabajadores de empresas similares, consumidores, usuarios, expertos técnicos y representantes de las comunidades afectadas. Los miembros son seleccionados al azar mediante sorteo para garantizar la diversidad y evitar la captura. El proceso de evaluación no se centra principalmente en la vigilancia o la disciplina, sino que está diseñado para apoyar el aprendizaje, la adaptación y la alineación. Si bien el equilibrio financiero a menudo puede evaluarse de forma automática, tanto la utilización de la capacidad como el rendimiento social más amplio requieren la emisión de un juicio. El Comité de Evaluación examina si la empresa está cumpliendo sus objetivos establecidos, cómo está gestionando las compensaciones entre objetivos inconmensurables y qué ajustes podrían ser necesarios. También pregunta, si las empresas están operando en la «frontera de producción» o cerca de la misma, es decir, si están obteniendo resultados en múltiples dimensiones sin un exceso de despilfarro o sin perder oportunidades.

un tratamiento convencional que llega a conclusiones similares, véase Alan Blinder *et al.*, *Asking about Prices: A New Approach to Understanding Price Stickiness*, Nueva York, 1998.

Las empresas no son receptoras pasivas de estas evaluaciones. Se les concede espacio para explicar y justificar sus decisiones para mostrar por qué se hicieron determinadas compensaciones entre los objetivos en juego y cómo sopesaron las prioridades contrapuestas dentro de las limitaciones presupuestarias. El objetivo no es identificar un único camino correcto, sino asegurarse de que las empresas actúan de buena fe para combinar múltiples valores bajo restricciones en la frontera de producción o cerca de ella en lugar de caer en hábitos que otorgan prioridad a la eficiencia, descuidando objetivos que no pueden valorarse económicamente o concediéndose a sí mismas demasiadas ventajas. Para la mayoría de las empresas, las evaluaciones se realizan en intervalos regulares. Sin embargo, las empresas grandes o de importancia sistémica están sujetas a una revisión continua mediante comités permanentes rotativos, que proporcionan una supervisión constante. Esto garantiza que las empresas influyentes no se desvíen de sus compromisos multicriterio ni acumulen poder informal. Si las empresas no cumplen las normas o no pueden resolver los conflictos por sí mismas, existe un mecanismo adicional: la administración judicial, que conlleva la pérdida de autonomía y el control sobre las decisiones de producción.

La administración judicial no es un castigo. Es una intervención temporal diseñada para restaurar la viabilidad de la empresa y mantener estándares multicriterio. Las empresas pueden entrar en administración judicial de forma involuntaria, debido a un fracaso persistente, o voluntariamente, si no son capaces de resolver conflictos internos o gestionar transiciones complejas. En cualquier caso, el objetivo es la rehabilitación, no la liquidación. Solo si la recuperación resulta inviable se produce la disolución y se reasignan los recursos. Cuando una empresa se liquida por razones ajenas al control de sus empleados, estos conservan el sostén salarial y pueden acceder a programas de reciclaje profesional o de reasignación. De este modo, la administración judicial no funciona como una herramienta disciplinaria, sino como un mecanismo de adaptación económica estructurada, que garantiza que la producción siga respondiendo a las prioridades colectivas.

Bajo el sistema monetario dual, las empresas experimentan restricciones presupuestarias reales sin verse obligadas a una competencia que coloque la eficiencia por encima de cualquier otro criterio. En este entorno, las empresas no actúan a ciegas. Dado que las decisiones de inversión se toman públicamente y todas las empresas operan con

libros abiertos, pueden planificar en relación con las demás. Saben qué cambios se avecinan, dónde es probable que se expanda o se contraiga la oferta y cómo encajan sus propios esfuerzos en el panorama cambiante de su sector. La coordinación no se impone desde arriba, sino que surge de la visibilidad compartida y el ajuste mutuo. La ruptura con la lógica capitalista impulsada por los beneficios también permite reorganizar las empresas en torno a una gobernanza democrática y procesos de toma de decisiones descentralizados en vez de optar por estructuras de gestión jerárquicas.

Las libertades en el centro de trabajo

Las empresas gestionadas por los trabajadores y trabajadoras a menudo se han considerado insostenibles. Los críticos argumentan que son reacias a contratar nuevos empleados, ya que hacerlo diluiría los ingresos de los trabajadores actuales; que tienden a invertir menos de lo necesario, favoreciendo los altos ingresos de los trabajadores por encima de la expansión a largo plazo; que, para tener éxito, en última instancia tendrán que imitar las estrategias orientadas por los beneficios de las empresas capitalistas convencionales, lo que convertiría la democracia en el lugar de trabajo en nada más que un respaldo secundario a las prioridades habituales de la dirección³³. Se trata de preocupaciones reales, pero no apuntan a defectos inherentes a la autogestión de los trabajadores, sino en realidad a las dificultades de operar este tipo de empresas dentro de una economía impulsada por los beneficios. Una economía multicriterio elimina esas presiones. Los salarios, denominados en CRÉDITOS, son fijados externamente por las Asociaciones Técnicas y no por las empresas, lo que elimina la tentación de maximizar los salarios a

³³ Para análisis clásicos de los retos estructurales a los que se enfrentan las empresas gestionadas por los trabajadores, véase Benjamin Ward, «The Firm in Illyria: Market Syndicalism», *American Economic Review*, vol. 48, núm. 4, 1958; Evsey Domar, «The Soviet Collective Farm as a Producer Cooperative», *American Economic Review*, vol. 56, núm. 4, 1966; James Meade, «The Theory of Labour-Managed Firms and of Profit Sharing», *Economic Journal*, vol. 82, núm. 325, 1972; Jaroslav Vanek, *The Participatory Economy*, Ithaca (NY), 1971; Gregory Dow, *Governing the Firm: Workers' Control in Theory and Practice*, Cambridge, 2003. Para un contrapunto útil a estas críticas, véase Jan Vanek, *The Economics of Workers' Management: A Yugoslav Case Study* [1969], Londres, 2017. Para un intento reciente de construir un sistema coherente en torno a las empresas gestionadas por los trabajadores, véase Mike Beggs, «The Market and Workplace in a Democratic Socialism», *Catalyst*, vol. 6, núm. 3, 2022, que propone la externalización de las finanzas a través de bancos públicos y la estabilidad salarial mediante referencias nacionales para superar los problemas comunes de propiedad.

expensas de la salud a largo plazo de la empresa. Las inversiones son asignadas por la Junta correspondiente, lo que elimina la necesidad de que las empresas retengan fondos para su crecimiento futuro.

Como resultado, las empresas gestionadas por los trabajadores y trabajadoras pueden convertirse en el modelo de producción por defecto, dotadas de estructuras organizativas que dependen de la naturaleza de su trabajo. En algunos sectores, los equipos pequeños y autogestionados pueden realizar sus tareas de forma autónoma. Otros necesitarán coordinar la producción entre los responsables de las diferentes etapas del flujo de trabajo de la empresa. En algunos casos, estos planteamientos se combinarán, lo que permitirá a los equipos gestionar tareas especializadas y contratar a otros actores para acometer proyectos compartidos. Una objeción común a la gestión por parte de los trabajadores, planteada por estos mismos, es que requiere reuniones interminables, pero las reuniones también proliferan en las empresas capitalistas, a menudo sin un propósito claro. En las empresas gestionadas por los trabajadores, las reuniones solo deben celebrarse cuando se trate de decisiones irreversibles, riesgos operativos significativos o coordinación entre varios equipos. En otros casos, las empresas pueden recurrir a un sistema de asesoramiento, similar al que se utilizan hoy en día en las «empresas de gestión horizontal» más eficaces. Los trabajadores individuales conservan la autoridad para tomar decisiones sobre sus propias tareas, pero deben consultar a los afectados por sus elecciones. El sistema ayuda a fomentar el sentido de la responsabilidad y la confianza en el propio criterio, cualidades que se extienden más allá del lugar de trabajo y sientan las bases para la plena movilización del conocimiento colectivo³⁴.

³⁴ En esta sección me baso principalmente en Frédéric Laloux, *Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness*, Bruselas, 2014. Véase también Michael Lee y Amy Edmondson, «Self-Managing Organizations: Exploring the Limits of Less-Hierarchical Organizing», *Research in Organizational Behaviour*, vol. 37, 2017; Brian Robertson, *Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World*, Nueva York, 2015 [ed. cast.: *Holocracia: El nuevo sistema organizativo para un mundo en continuo cambio*, Madrid, 2015]; Gary Hamel y Michele Zanini, *Humanocracy: Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them*, Boston (MA), 2020 [ed. cast.: *Humanocracia: creando organizaciones tan extraordinarias como las personas que las integran*, Barcelona, 2022]; Cal Newport, *A World without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload*, Londres, 2021 [ed. cast.: *Un mundo sin e-mail: reinventando el trabajo en un mundo con exceso de comunicación*, Barcelona, 2022]; Dennis Bakke, *Joy at Work: A Revolutionary Approach to Fun on the Job*, Seattle (WA), 2005.

En las empresas capitalistas, los trabajadores desarrollan una inmensa experiencia –resolución práctica de problemas, adaptaciones del flujo de trabajo, enfoques técnicos innovadores–, pero esta se subordina en gran medida a los imperativos de la maximización de los ingresos. En una economía multicriterio, la empresa se convierte en un lugar para la resolución de problemas, donde se anima a los trabajadores a aportar sus habilidades, experiencia y criterio para proponer innovaciones y experimentar con nuevas formas de organizar la producción. Lo que a primera vista parece un conjunto de limitaciones –sin ganancias retenidas, sin objetivos de beneficios, sin control sobre la expansión– resulta ser una forma de libertad. Las empresas ya no se ven obligadas a navegar por los mercados crediticios ni a perseguir ingresos para expandirse. En su lugar, reciben un presupuesto operativo y un conjunto claro de objetivos. Dentro de estos parámetros, tienen la libertad de concentrarse en la esencia de su trabajo: mejorar las prácticas, compartir ideas y probar innovaciones sin dejarse llevar por los imperativos de los beneficios.

Esa libertad también transforma la motivación para trabajar. En el capitalismo, los trabajadores se ven a menudo obligados a sacrificar la amplia variedad de objetivos que consideran significativos –como la preocupación por la calidad, el cuidado y la sostenibilidad– para cumplir los objetivos de eficiencia. Cuando se introducen otros objetivos, estos aparecen como métricas de rendimiento que hay que manipular, siempre subordinadas al objetivo primordial de ganar dinero. En una economía multicriterio, esta lógica se rompe. Los objetivos intrínsecamente valiosos, como el equilibrio ecológico o el bienestar en el lugar de trabajo, pueden tratarse como fines en sí mismos, que deben equilibrarse colectivamente dentro de los límites de los recursos disponibles³⁵.

Entre los objetivos que vale la pena perseguir por sí mismos, destacan la mejora del trabajo y la reducción de las horas de trabajo. Se anima a las empresas a rediseñar las tareas y los flujos de trabajo para mejorar la

³⁵ Aquí me baso en la teoría de la autodeterminación desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan en *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness*, Nueva York, 2017; véase también Mihaly Csikszentmihalyi, *Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play*, San Francisco (CA), 1997; George Leonard, *Mastery: The Keys to Success and Long-Term Fulfillment*, Nueva York, 1998; Daniel Pink, *Drive: The Surprising Truth about What Motivates Us*, Nueva York, 2009 [ed. cast.: *La sorprendente verdad sobre qué nos motiva*, Barcelona, 2010]; y Edward Deci, *Why We Do What We Do: Understanding Self-Motivation*, Nueva York, 1996.

jornada de trabajo, el compromiso y la satisfacción. Se puede recurrir a expertos externos –ingenieros, diseñadores de espacios de trabajo, psicólogos organizacionales– para ayudar a remodelar las tareas y los entornos de manera que favorezcan la motivación intrínseca³⁶. Las tareas repetitivas se eliminan siempre que resulta posible, no porque sean ineficientes, sino porque degradan la experiencia laboral. Cuando las tareas repetitivas siguen siendo necesarias, su carga debe distribuirse de manera equitativa, mediante rotaciones o ajustes estructurales, de modo que ningún grupo se vea asignado de forma permanente al trabajo menos deseable³⁷. El equilibrio entre la reducción de la jornada laboral y la mejora de la calidad del trabajo se determina democráticamente, a escala de la empresa, del sector y de la sociedad en general. Una economía multicriterio no exige que el trabajo sea el principal sentido de la vida; a diferencia de las tradiciones socialistas anteriores, que situaban el trabajo en el centro de la autorrealización, esto permite a las personas tratarlo como uno de los muchos ámbitos que dan sentido a la vida. Al mismo tiempo, las empresas, a veces en colaboración con otros grupos y asociaciones comunitarios, pueden aspirar a configurar el entorno social más amplio en el que viven sus trabajadores mediante el desarrollo de propuestas de inversión para su consideración por parte de su Junta de Inversiones.

6. LAS JUNTAS DE INVERSIONES

Como observaron los keynesianos, el nivel operativo de la economía –la producción y distribución de bienes y servicios– se estructura y desarrolla a través de la función de inversión de la sociedad. Las capacidades actuales son el resultado de las decisiones de inversión del pasado. En una economía multicriterio, las decisiones de las Juntas de Inversión constituidas democráticamente determinan qué tipos de capacidad material, infraestructural y organizativa estarán disponibles en cada ciclo de producción. Cada Junta de Inversión supervisa un sector distinto, como la fabricación de bienes duraderos, el transporte, los servicios de alimentación, la vivienda y los espacios comerciales, la seguridad y la justicia, y

³⁶ Por ejemplo, véase Åke Sandberg (ed.), *Enriching Production: Perspectives on Volvo's Uddevalla Plant as an Alternative to Lean Production*, Aldershot, 1995.

³⁷ El problema de cómo asignar el trabajo desagradable o menos deseable ha sido fundamental en los debates sobre la planificación democrática. Véase M. Albert y R. Hahnel, *The Political Economy of Participatory Economics*, cit.; y P. Devine, *Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society*, cit., que ofrecen perspectivas diferenciadas.

la atención sanitaria³⁸. Estas Juntas crean empresas, las modifican y las cierran. Asignan los PUNTOS para construir fábricas y redes de transporte, reconfiguran las cadenas de suministro, incorporan sistemas de *software* e introducen nuevas herramientas y flujos de trabajo. Las inversiones también pueden destinarse a la reorganización del trabajo, la modernización de viviendas para mejorar su comodidad y sostenibilidad, la ampliación de las infraestructuras de cuidados y el fomento de los bienes públicos, desde espacios verdes hasta escuelas infantiles y bibliotecas, que enriquecen la textura de la vida cotidiana. Se podría utilizar una encuesta social u otro instrumento para determinar cómo se distribuyen los PUNTOS asignados a la inversión entre las distintas Juntas, determinando así sus presupuestos anuales.

Las Juntas de Inversión son asambleas políticas –una por cada sector– compuestas por trabajadores, consumidores, representantes de la comunidad y expertos técnicos³⁹. En esencia, representan una forma de autogestión colectiva de un sector productivo, que abarca no solo a quienes producen bienes y servicios, sino también a quienes dependen de ellos. Las Juntas proporcionan un espacio para el debate, la creación de coaliciones y la toma de decisiones: se trata de una infraestructura institucional, que permite gobernar la economía como un proyecto colectivo. Dado que son lugares de controversia política, su composición democrática es fundamental. Los trabajadores y trabajadoras tienen un conocimiento directo del sector en cuestión –y un interés directo en las inversiones que podrían mejorar las condiciones de trabajo–, razón por la cual desempeñan un papel esencial. Los usuarios y clientes contribuyen a garantizar que las decisiones de inversión den prioridad a la calidad, la asequibilidad y la accesibilidad de los productos. Los representantes de los grupos comunitarios y las asociaciones cívicas ofrecen una perspectiva social más amplia del sector. Los expertos técnicos aportan conocimientos especializados, lo que ayuda a evaluar la viabilidad y la coherencia de las propuestas que compiten entre sí.

³⁸ La International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC, Rev.4) ofrece una primera aproximación de cómo podrían dividirse estos sectores.

³⁹ Esta estructura se inspira en P. Devine, *Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society*, cit., aunque su modelo implica una arquitectura institucional más estratificada, con juntas comunitarias y sectoriales, que interactúan y operan en múltiples niveles.

Se podrían contemplar diversos diseños electorales para hacer converger a las partes interesadas. Una opción sería organizar elecciones sectoriales para la Junta de Inversiones en las que los trabajadores, los consumidores y los representantes de la comunidad votaran cada pocos años a los representantes de su sector. Este modelo hace hincapié en la proximidad y la participación: quienes tienen experiencia directa en un sector serían los que más influencia tendrían en su desarrollo. Una segunda opción sería celebrar elecciones generales a las Juntas de Inversión, basadas en la representación proporcional, en las que los partidos políticos o las coaliciones competirían por la orientación de las inversiones en toda la sociedad. Una votación nacional podría determinar la composición de todas las Juntas, asignándose los escaños proporcionalmente. Este modelo garantiza que las Juntas reflejen orientaciones ideológicas más amplias en lugar de funcionar como ámbitos políticos aislados.

Un tercer modelo sería bicameral. Cada Junta estaría compuesta, en primer lugar, por una Asamblea Sectorial, integrada por trabajadores y consumidores, que evalúan y proponen planes de inversión directamente, y, en segundo, por una Asamblea de Prioridades Sociales, elegida mediante un voto proporcional general para revisar esos planes y ratificarlos o devolverlos para su revisión. Esto evitaría que las Juntas sectoriales persiguieran agendas aisladas, al tiempo que garantizaría que los cambios ideológicos a gran escala se reflejaran en las correspondientes políticas. Si las dos cámaras llegaran a un punto muerto, las correspondientes elecciones anticipadas celebradas en ese sector podrían resolver esa situación de estancamiento. El marco multicriterio es flexible en cuanto a la elección del modelo. Lo más importante es que la inversión siga siendo un ámbito abierto a la controversia en el que puedan defenderse perspectivas contrapuestas en vez de caer en la inercia burocrática o el control de las elites⁴⁰.

⁴⁰ La democracia directa o participativa sería un cuarto modelo para las Juntas de Inversión, pero los procesos participativos a gran escala suelen tener dificultades para gestionar la complejidad, mantener la participación y evitar las desigualdades en la expresión de opiniones. Sobre las diferentes perspectivas, véase Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge, 1970 [ed. cast.: *Participación y teoría democrática*; Buenos Aires, 2014]; Iris Marion Young, *Inclusion and Democracy*, Oxford, 2000; Archon Fung, «Varieties of Participation in Complex Governance», *Public Administration Review*, vol. 66, 2006; Nadia Urbinati, *Representative Democracy: Principles and Genealogy*, Chicago (IL), 2006 [ed. cast.: *La democracia representativa: principios y genealogía*, Buenos Aires, 2017]; Ernesto Ganuza y Gianpaolo Baiocchi, *Popular Democracy: The Paradox of Participation*, Stanford (CA), 2016.

Otra cuestión es si los expertos técnicos deberían tener derecho a voto en las Juntas de Inversión. Una opción es conceder a los expertos plenos derechos de voto, garantizando que los conocimientos de ingeniería, ecológicos, logísticos y científicos se integren en el núcleo del proceso. Una segunda opción es situar a los expertos como asesores externos, sin derecho a voto. En cualquier caso, los expertos deben ser elegidos mediante elecciones democráticas dentro de sus Asociaciones Técnicas en lugar de ser nombrados por los líderes políticos, reconociendo la experiencia como una forma organizada de conocimiento colectivo y no como una credencial personal⁴¹. Se podría añadir otra capa de participación democrática en forma de Mesas Ciudadanas, reunidas mediante sorteo para supervisar el comportamiento de la Junta de Inversiones, que elaborarían informes públicos susceptibles de servir de fundamento para futuras opciones electorales. Sin embargo, la legitimidad de las decisiones de inversión depende de que las personas tengan voz directa en la configuración de los resultados y eso requiere representación política⁴².

Las personas deben poder hacer campaña por aquello en lo que creen, votar a representantes que compartan sus prioridades y exigirles responsabilidades mediante el escrutinio público y el poder de destituirlos de sus cargos. Hay buenas razones para esperar que el gobierno representativo funcione mejor en este contexto, ya que el debate político ya no se ve sesgado por la concentración de la riqueza ni limitado por la amenaza de la fuga de capitales. Como se ha señalado anteriormente, cada miembro del Demos recibe un presupuesto de PUNTOS GRATUITOS de igual cuantía,

⁴¹ En cuanto los debates sobre cómo integrar los conocimientos técnicos en la toma de decisiones democráticas, véase Sheila Jasanoff, *The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers*, Cambridge (MA), 1990; Frank Fischer, *Democracy and Expertise: Reorienting Policy Inquiry*, Oxford, 2009; Hélène Landemore, *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*, Princeton (NJ), 2020; Zeynep Pamuk, *Politics and Expertise: How to Use Science in a Democratic Society*, Princeton (NJ), 2024.

⁴² Aunque el sorteo se ha propuesto como una forma de fortalecer la participación democrática, no debería aplicarse a las decisiones de inversión, que conciernen a elecciones políticas entre futuros alternativos y deben seguir siendo discutibles. Sobre las propuestas de una sociedad y una economía estructuradas en torno al sorteo, véase Alexander Guerrero, *Lottocracy: Democracy without Elections*, Oxford, 2024, y Michael McCarthy, *The Master's Tools: How Finance Wrecked Democracy (And a Radical Plan to Rebuild It)*, Londres y Nueva York, 2025. Sobre las perspectivas críticas, véase Cristina Lafont, *Democracy without Shortcuts: A Participatory Conception of Deliberative Democracy*, Oxford, 2020 [ed. cast.: *Democracia sin atajos: una concepción deliberativa de la democracia participativa*, Madrid, 2011]; y Cristina Lafont y Nadia Urbinati, *The Lottocratic Mentality: Defending Democracy against Lottocracy*, Oxford, 2025.

que puede asignar a Asociaciones Libres, incluidas las dedicadas a la agitación política o al debate electoral. Aunque pueden seguir existiendo intereses creados –ningún sistema puede eliminarlos por completo–, su alcance se ve muy limitado. No hay beneficios que defender, ni fortunas privadas que amasar dirigiendo las decisiones de inversión. Y, lo que es más importante, la propia economía no está estructurada de manera que la democracia se contraponga al rendimiento económico. En los sistemas capitalistas, los esfuerzos por reflejar los valores populares en la vida económica suelen ir en detrimento de la confianza de los inversores. Aquí, el sistema está diseñado para responder a los valores que realmente tiene la gente. Las decisiones democráticas relativas a esos valores son el medio mismo por el que avanza la economía.

Cada ciclo de inversión comienza con la revisión por parte de las Juntas de Inversión de datos exhaustivos sobre las condiciones sectoriales. La Matriz de Datos proporciona información multidimensional sobre las condiciones económicas, ecológicas, sociales y subjetivas. Estos diversos indicadores no se agregan en una única puntuación compuesta, sino que se presentan intencionadamente como señales divergentes, lo cual pone de relieve las tensiones reales existentes entre las prioridades. Como hemos visto, las visualizaciones concebidas de acuerdo con el modelo de Neurath pueden ayudar a las Juntas a situar las condiciones sectoriales dentro de la economía en su conjunto, mostrando los vínculos con otros sectores y las relaciones con agregados ecológicos y sociales más amplios. Las interfaces intuitivas permiten que los miembros de la Junta y las partes interesadas exploren los datos de forma interactiva, elaborando escenarios hipotéticos que pronostican lo que sucedería si cambiaran las prioridades de inversión. Los testimonios de los expertos y las aportaciones de las partes interesadas complementan estas métricas cuantitativas, ofreciendo evaluaciones cualitativas de los retos más acuciantes del sector.

Una vez que una Junta de Inversiones ha recibido su asignación de PUNTOS, lanza convocatorias para la presentación de propuestas de inversión. Los representantes de los trabajadores, los clientes, los miembros de la comunidad y los expertos técnicos pueden exponer los problemas que desean resolver o los objetivos que desean promover, pero estas directrices no establecen límites fijos. Las propuestas pueden responder directamente a esas prioridades o pueden introducir nuevas posibilidades, llamando la atención sobre determinados retos o innovaciones, que

aún no se han identificado. Las propuestas de inversión suelen provenir de las empresas existentes, cuyos trabajadores y trabajadoras están en una posición idónea para identificar los obstáculos o las oportunidades de mejora; su participación directa en la producción les permite vislumbrar posibilidades que los responsables externos de la toma de decisiones podrían pasar por alto. Las propuestas de inversión también pueden abogar por empresas de nueva creación; las Juntas de Inversión reservan una parte de sus PUNTOS para nuevas empresas, lo que garantiza que las empresas emergentes tengan acceso a apoyo en las primeras etapas en lo referido a locales, bienes de equipo y mano de obra. Muchas propuestas surgirán de la colaboración con institutos de investigación, consultoras y asociaciones cívicas. Una organización comunitaria centrada en la movilidad urbana puede desarrollar una propuesta para ampliar la infraestructura de transporte público y buscar elementos dentro del sector del transporte capaces de implementarla. Un instituto de investigación que trabaje en materiales sostenibles puede colaborar con empresas de la construcción para abandonar los insumos tradicionales. Cada propuesta debe estar vinculada a una empresa capaz de implementarla, lo cual garantiza que los proyectos no solo sean interesantes, sino también viables en la práctica.

Las propuestas de inversión son documentos estructurados que especifican la viabilidad, los requisitos presupuestarios, las implicaciones para la cadena de suministro y los riesgos potenciales, además de articular la contribución prevista a objetivos sociales más amplios. Dado que la elaboración de propuestas implica una cantidad significativa de trabajo, las empresas reciben reconocimiento y compensación por sus esfuerzos. Los incentivos materiales pueden adoptar la forma de bonificaciones en CRÉDITOS, lo que supone una recompensa justa por el tiempo dedicado. Pero la motivación más profunda es intrínseca: la oportunidad de contribuir a una innovación significativa y de configurar la trayectoria del desarrollo económico. En este sentido, la competencia por los fondos de inversión en una economía multicriterio se asemeja más a la competencia en las ciencias que a la de un mercado capitalista. Los científicos no persiguen los descubrimientos principalmente por ganancias económicas, sino por el reconocimiento, la capacidad de configurar su campo y la satisfacción de producir conocimientos que benefician a la sociedad. El reconocimiento público desempeña un papel crucial en esta dinámica: las empresas que desarrollan repetidamente innovaciones exitosas ganan credibilidad ante las Juntas de Inversión, lo que les

facilita obtener financiación en el futuro⁴³. Dado que las propuestas de inversión y las transacciones con PUNTOS son totalmente públicas, las empresas no se desenvuelven de forma aislada ni intentan superar a sus competidores mediante conocimientos exclusivos. Por el contrario, operan en un entorno abierto y altamente coordinado, lo que fomenta formas colaborativas de competencia.

La selección de propuestas por parte de la Junta de Inversiones se realiza dentro de estrictas restricciones presupuestarias. Cada Junta debe aspirar a gastar el 100 por 100 de su cuota de PUNTOS de inversión totales desembolsados durante cada ciclo de inversión. Algunos se asignan previamente a las empresas mediante un proceso acelerado, lo que permite mejoras y mantenimiento incrementales. Los fondos restantes se asignan estratégicamente a una serie de necesidades: apoyar nuevas propuestas, acelerar la adopción de innovaciones probadas, incubar nuevas empresas, reestructurar las que fracasan y mantener los compromisos de financiación a largo plazo para acometer transformaciones plurianuales. Dentro de estos límites, el proceso de selección no consiste en elegir las propuestas individuales más atractivas, sino en reunir un conjunto de inversiones que doten de forma al sector de manera coherente y con visión de futuro. Aunque las propuestas de inversión no se clasifican algorítmicamente ni se reducen a puntuaciones numéricas, se someten a evaluaciones graduadas preparadas por el personal de la Junta sectorial, principalmente para comprobar la exactitud de las estimaciones de costes efectuadas. Estas evaluaciones ayudan a los miembros de la Junta a descartar las propuestas que parecen poco viables. Pero la calificación técnica tiene sus límites: los beneficios no pueden reducirse a una escala común. Es razonable que haya desacuerdo sobre qué criterios son los más importantes, sobre cómo definirlos y perseguirlos y sobre cómo ponderarlos entre sí. Así pues, los valores sociales no pueden tratarse como insumos estáticos que se incorporan al sistema, porque surgen de forma dinámica a través del patrón de inversiones a lo largo del tiempo, revelando qué prioridades consideran más importantes las Juntas de Inversión y la ciudadanía en general.

Los miembros de la Junta deliberan abiertamente sobre las ventajas y desventajas recíprocas, que conlleva la selección de un conjunto concreto de propuestas. Pueden basarse en los debates simultáneos, que

⁴³ Para la comparación con la competencia en las ciencias, véase John O'Neill, *The Market: Ethics, Knowledge and Politics*, Abingdon, 1998.

tienen lugar en foros públicos en el curso de los cuales grupos comunitarios, observadores ecológicos, representantes de sectores adyacentes y otras partes interesadas pueden expresar su apoyo o sus preocupaciones. Las partes interesadas también pueden presentar formalmente sus opiniones a la Junta de Inversiones y defender inversiones específicas. Los expertos técnicos proporcionan testimonios y análisis a petición de los miembros de la Junta. La integración de las deliberaciones de las partes interesadas y los conocimientos de los expertos garantizan, que las decisiones de inversión estén bien fundamentadas y sean ampliamente legítimas, incluso si son esencialmente políticas.

A continuación, la Junta de Inversiones vota qué propuestas aprobar. El proceso de votación podría estructurarse de diferentes maneras con el objetivo de garantizar una aprobación amplia en lugar del dominio de un solo grupo de partes interesadas. Sin embargo, a veces hay conjuntos de propuestas que abordan la misma cuestión de maneras fundamentalmente diferentes. Cuando las propuestas son compatibles, como los diferentes modelos de expansión del transporte público, las Juntas de Inversión pueden aprobar varias, fomentando la diferenciación y la experimentación. Cuando solo pueda llevarse a cabo una opción, las Juntas utilizarían un proceso de votación por mayoría simple para determinar la vía preferida. En los casos en que los representantes consideren que una propuesta sería perjudicial para los objetivos sociales a largo plazo –por ejemplo, al sobrepasar los límites ecológicos o socavar las prioridades sociales–, pueden activar un proceso de veto para determinar si la propuesta debe bloquearse. Las propuestas bloqueadas pueden revisarse y volver a presentarse en ciclos futuros. De esta manera, el poder de veto garantiza, que se apliquen las correspondientes protecciones primordiales sin cerrar la posibilidad de una transformación negociada a lo largo del tiempo.

Sincronizar la transformación

Dado que sus ámbitos son específicos de cada sector, las Juntas de Inversión no imponen desde arriba un plan totalmente coherente y centralizado para la economía, sino que la coordinación y el compromiso surgirán frecuentemente de forma orgánica a través de este proceso. Los miembros de la Junta reconocerán las interdependencias entre las inversiones y crearán coaliciones para fortalecer el apoyo. Pero el sistema no depende del consenso. Dado que el proceso de inversión se estructura

en torno a la votación, y no a la unanimidad, la economía avanza incluso cuando las prioridades de los miembros de la Junta divergen y los conflictos no se resuelven. El objetivo no es eliminar la controversia política, sino institucionalizarla para que el desacuerdo estructurado sea el motor de la toma de decisiones y no su obstáculo invalidante⁴⁴.

Una vez que la Junta ha distribuido los PUNTOS asignados, las empresas comienzan a implementar sus propuestas. Como se mencionó anteriormente, los resultados de los proyectos de inversión son evaluados por Comités de Evaluación, compuestos por trabajadores, consumidores, expertos técnicos y representantes de la comunidad. También consideran las nuevas cuestiones que han surgido, poniendo de relieve resultados imprevistos y sugiriendo nuevas líneas de investigación. En las grandes empresas y los organismos gubernamentales burocráticos, los proyectos fallidos suelen ocultarse para proteger la reputación; las evaluaciones multicriterio garantizan que las inversiones ineficaces se reconozcan públicamente. La Matriz de Datos puede aportar información adicional, lo que ayuda a los Comités de Evaluación y a las Juntas de Inversión a decidir qué proyectos deben cancelarse, reestructurarse o acelerarse para su adopción generalizada en todo el sector. Pero el proceso de evaluación no consiste solo en determinar el éxito o el fracaso, sino en el aprendizaje colectivo. Las empresas se ganan su reputación por su coherencia en el cumplimiento de los respectivos compromisos multicriterio o por su disposición a liderar cuestiones innovadoras. Del mismo modo, los miembros de las Juntas de Inversión –y sus coaliciones políticas– son evaluados por las partes interesadas y por los votantes en función de la eficacia de sus decisiones de inversión. Este proceso de evaluación iterativo transforma la inversión en un experimento democrático continuo, que se adapta constantemente a las nuevas condiciones.

⁴⁴ Mi enfoque sobre la gobernanza de la Junta de Inversiones está profundamente influenciado por la obra de Pat Devine titulada *Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society*, Cambridge, 1988. Sin embargo, el modelo de «coordinación negociada» de Devine pretende promover el consenso como fundamento normalizado de la coordinación económica. En su opinión, cuando no puede llegarse a un compromiso, la coordinación económica se rompe y los sectores o actividades se paralizan hasta que se restablece el acuerdo. Por el contrario, el modelo que aquí se propone –lo que podríamos llamar un «modelo de coordinación conflictiva»– parte de la base de que el desacuerdo es una característica permanente de la vida económica. La coordinación no se lleva a cabo resolviendo los conflictos de antemano, sino estructurándolos en procedimientos políticos capaces de producir resultados viables a pesar de la controversia existente.

Algunas decisiones de inversión no pueden dejarse en manos del proceso incremental y exploratorio de las Juntas de Inversión sectoriales. Requieren una acción amplia y sincronizada en múltiples sectores. Para ello existen los Comités de Coordinación: instituciones diseñadas para impulsar transformaciones a escala de la sociedad en su conjunto, que requieren una alineación intersectorial. Durante los periodos de cambios rápidos, incluidas las primeras etapas de la transición a una economía multicriterio, los Comités de Coordinación podrían convertirse en los principales instrumentos a través de los cuales se canalizan los fondos de inversión. Su objetivo es orientar el cambio económico para alcanzar objetivos importantes, de manera que se superen los obstáculos y la inercia, permitiendo que la sociedad avance sin esperar a que cada sector elabore su propio plan. Esto no significa una planificación económica centralizada en el sentido tradicional. No existe un plan maestro que dicte cómo deben encajar todas las piezas. Por el contrario, el Demos selecciona una serie de prioridades generales y destina una parte de los fondos de inversión a ellas. En este sentido, los Comités de Coordinación actúan como el mecanismo de política industrial de una economía multicriterio: se trata de esfuerzos específicos, limitados en el tiempo y estructurados democráticamente para abordar la coordinación a gran escala, similares en su función a los planes quinquenales de las economías planificadas tradicionales o de la China y el Vietnam contemporáneos, pero integrados en un sistema político en disputa en lugar de impuestos desde arriba⁴⁵.

Cada Comité Coordinador se financia mediante una parte reservada de los PUNTOS de inversión; por ejemplo, el 10 por 100 del total de los fondos podría asignarse a un Comité concreto, si el sistema lo considera justificado. A diferencia de las Juntas de Inversión, que gestionan

⁴⁵ Para una visión democrática de la política industrial, véase Amy Kapczynski y Joel Michaels, «Administering a Democratic Industrial Policy», *Harvard Law and Policy Review*, vol. 18, núm. 2, 2023. Sobre el resurgimiento contemporáneo de la política industrial, en particular en relación con el auge de China y la necesidad de una forma más coordinada de transición ecológica, que no dependa únicamente de la fijación de precios del carbono, véase Jesus Felipe (ed.), *Development and Modern Industrial Policy in Practice: Issues and Country Experiences*, Cheltenham, 2015; Ha-Joon Chang y Antonio Andreoni, «Industrial Policy in the 21st Century», *Development and Change*, vol. 51, núm. 2, 2020; Barry Naughton, *The Rise of China's Industrial Policy, 1978 to 2020*, Ciudad de México, 2021; Réka Juhász, Nathan Lane y Dani Rodrik, «The New Economics of Industrial Policy», *Annual Review of Economics*, vol. 16, núm. 1, 2024; y Mariana Mazzucato y Dani Rodrik, «Industrial Policy with Conditionality: A Taxonomy and Sample Cases», documento de trabajo, UCL Institute for Innovation and Public Purpose, 2023.

las inversiones sectoriales en curso, los Comités Coordinadores tienen horizontes temporales fijos, lo que garantiza que sus mandatos se mantengan bajo control. La composición de estos Comités podría determinarse de múltiples maneras, combinando los conocimientos técnicos con la responsabilidad democrática. Una vez constituido, la primera tarea del Comité de Coordinación es trazar diferentes vías posibles para alcanzar su objetivo. Si el objetivo es la transición ecológica, por ejemplo, podría desarrollar varios modelos competitivos para eliminar gradualmente los combustibles fósiles y reestructurar industrias clave. A continuación, estas propuestas se someten a debate público. Las asambleas ciudadanas elegidas mediante sorteo podrían evaluar las propuestas, basándose en testimonios de expertos, proyecciones de modelos y consultas a las partes interesadas. A continuación, se celebra un referéndum que implica al conjunto de la sociedad en la tarea de elegir entre las propuestas que compiten entre sí, lo cual otorga legitimidad democrática a la vía seleccionada, concediéndose así al Comité de Coordinación el mandato para proceder.

Es fundamental señalar que el Comité no puentea a las Juntas de Inversión; sus propuestas deben seguir pasando por el proceso normal de inversión. Lo que hace el Comité es cambiar el cálculo económico para las empresas y las Juntas de Inversión al cubrir los costes de los proyectos en consideración. Si una Junta de Inversión aprueba un proyecto que fortalece el mandato del Comité Coordinador, los fondos de este compensan el coste del proyecto, eliminando la carga financiera desde la perspectiva de la Junta. De este modo, los Comités de Coordinación suavizan deliberadamente las restricciones presupuestarias a las que se enfrentan las decisiones de inversión, una característica necesaria para impulsar un determinado cambio estructural a gran escala. Esta suavización está, sin embargo, cuidadosamente limitada: solo se aplica a los costes de inversión, no a los presupuestos operativos corrientes de las empresas⁴⁶.

⁴⁶ János Kornai criticó célebramente la «restricción presupuestaria blanda» como fuente de ineficiencia bajo el socialismo, pero su análisis, al igual que el de Włodzimierz Brus y Kazimierz Łaski, identificó erróneamente el problema central como la ausencia de precios determinados por el mercado («paramétricos») y el uso continuado de la política industrial sectorial. Sin embargo, fue precisamente la agresiva política industrial la que impulsó las extraordinarias tasas de crecimiento industrial de la URSS entre las décadas de 1930 y 1950 y le permitió repeler la invasión nazi. Véase János Kornai, «The Soft Budget Constraint», *Kyklos*, vol. 39, núm. 1, febrero de 1986; Włodzimierz Brus y Kazimierz Łaski, *From Marx to the Market: Socialism in Search of an Economic System*, Oxford, 1989.

El último componente del sistema de inversión es el Comité General de Facilitación, que ayuda a otros organismos de coordinación de inversiones cuando surgen obstáculos. A diferencia de las Juntas de Inversión sectoriales, que se centran en la toma de decisiones en cada sector, o de los Comités de Coordinación específicos, que dirigen la inversión hacia transformaciones importantes, el Comité General de Facilitación no tiene una agenda política activa, sino que ayuda a resolver los conflictos intersectoriales surgidos de forma orgánica del proceso de inversión. Por ejemplo, si dos sectores requieren una expansión simultánea de la infraestructura –por ejemplo, el almacenamiento de energía y el transporte electrificado–, pero cada Junta de Inversión duda en avanzar sin la otra, el Comité General de Facilitación puede asignar fondos para fomentar el desarrollo sincronizado. Al resolver estas interdependencias emergentes, el Comité ayuda a evitar posibles fallos en la coordinación de la política industrial.

Históricamente, la política industrial se ha aplicado de forma limitada para ampliar la producción industrial con fines de movilización en tiempos de guerra. Su potencial más profundo reside en generalizar este planteamiento a múltiples dimensiones de la vida social. La transición ecológica es un candidato obvio para la intervención del Comité Coordinador, pero el modelo podría extenderse a cualquier transformación deseada democráticamente: calidad del trabajo, atención colectiva y renovación democrática, junto con los objetivos económicos y de infraestructura tradicionales. Un Comité Coordinador podría impulsar la sustitución de los plásticos por alternativas sostenibles, financiando la I+D, los cambios de infraestructura y las estrategias de adaptación de los consumidores. Otro podría impulsar la semana laboral de cuatro días apoyando la automatización, que mejora la productividad, invertir en la mejora de la calidad del trabajo para profesiones desatendidas como los cuidadores, los cocineros y los limpiadores, o prepararse para los retos de la migración climática a gran escala creando ciudades acogedoras y resilientes. Dada la capacidad limitada de la sociedad para centrarse simultáneamente en diferentes transformaciones a gran escala, el número de Comités de Coordinación activos sería limitado; un marco razonable podría permitir que funcionaran hasta tres en un momento dado. Al final del mandato de un Comité, se evaluaría su impacto. Si ha cumplido con éxito sus objetivos, se disuelve. Si el objetivo sigue sin cumplirse parcialmente, pero sigue siendo relevante, el Demos puede votar para renovar su mandato.

7. LAS ASOCIACIONES TÉCNICAS

Una sociedad tecnológicamente compleja requiere una división del trabajo altamente especializada. A diferencia de algunas concepciones de un mundo posterior al capitalismo que imaginan que las habilidades generalistas se convertirán en la norma, la economía multicriterio se toma en serio la trayectoria del progreso tecnológico. No requiere menos especialistas, sino más, repartidos en una gama cada vez más amplia de disciplinas. La especialización no es una característica accidental de la producción moderna, sino una condición necesaria para mantener una economía tecnológicamente avanzada. Un solo proceso industrial puede involucrar a ingenieros mecánicos, desarrolladores de *software*, científicos de materiales, diseñadores de interfaces y especialistas en cadenas de suministro. El progreso no se produce aplanando la especialización, sino integrando diversas formas de conocimiento experto en sistemas complejos. En una sociedad así, el conocimiento experto no debe seguir siendo un privilegio de unos pocos. En lugar de abolir la profesionalización, debe universalizarse: todo el mundo podría ser experto en algo y muchas personas podrían adquirir múltiples competencias a lo largo de su vida. Por lo tanto, mantener una economía multicriterio requiere un marco institucional que fomente el conocimiento experto y lo integre en la toma de decisiones económicas democráticas.

Esta es la función de las Asociaciones Técnicas. Como hemos señalado, se basan en el modelo de los gremios de oficio o de los sindicatos, pero van mucho más allá de ambos; son responsables de la formación, la certificación, las normas profesionales internas y la integración de los conocimientos especializados en el proceso de planificación de las inversiones. Las Asociaciones Técnicas garantizan que cada campo cuente con un proceso estructurado para formar a los nuevos profesionales y reconocer su competencia. Algunos campos, como la educación, la medicina y el derecho, ya cuentan con sólidas tradiciones profesionales. Otros podrían necesitar desarrollarlas o ampliarlas, por ejemplo, la logística, el saneamiento, la preparación de alimentos, el cuidado de personas mayores, las tareas domésticas, el cuidado de niños y niñas y la salud comunitaria. Todas las tareas socialmente necesarias, ya hayan sido valoradas o descuidadas históricamente, se convierten en un lugar de formación estructurada, de normas en evolución y de orgullo profesional. La pertenencia a una Asociación Técnica no está vinculada a la situación laboral; se puede ser cocinero en paro, analista de datos

autónomo o cuidador entre dos trabajos. Lo que importa no es si se tiene actualmente un puesto remunerado, sino si se ha completado la formación, se ha demostrado la competencia y se ha participado en la vida de la Asociación⁴⁷.

Las Asociaciones Técnicas definen y transforman los estándares profesionales. El trabajo de un profesor no se juzga de la misma manera que el de un arquitecto o un cirujano; los objetivos de un ingeniero de *software* difieren de los de un experto en saneamiento. En cada campo, las Asociaciones Técnicas establecen estándares profesionales de competencia y excelencia a través de procesos de debate democrático en los que los miembros discuten y perfeccionan sus concepciones sobre cuáles deben ser las mejores prácticas y cómo deben evolucionar sus campos en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos. Al integrar estos debates en instituciones estables, las Asociaciones Técnicas también proporcionan un mecanismo crucial para la rendición de cuentas. En un mundo en el que los incentivos económicos son escasos, la excelencia profesional debe mantenerse mediante la evaluación por pares. La profesionalización no es solo una credencial, sino una capacidad continuamente reafirmada para contribuir a los objetivos colectivos. La confianza en una profesión –y el orgullo de pertenecer a ella– dependen de la integridad con la que las Asociaciones Técnicas exigen a sus miembros el cumplimiento de los estándares de su oficio.

Las Asociaciones Técnicas también constituyen un puente institucional clave entre el conocimiento experto y la democracia, ya que garantizan que los expertos participen en las estructuras de toma de decisiones como representantes responsables en lugar de como una elite incuestionable. De ahí el proceso democrático mediante el cual las Asociaciones Técnicas eligen a sus propios representantes para participar en los Comités de Evaluación, las Juntas de Inversión y los Comités de Coordinación. Estas elecciones están estructuradas para reflejar la diversidad de perspectivas dentro de un campo determinado, garantizando que el conocimiento experto no se represente como una voz monolítica,

⁴⁷ Para una versión temprana de esta idea, véase Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society* [1893], Basingstoke, 1984), Prefacio a la segunda edición [ed. orig.: *De la división du travail social*, París, 2013; ed. cast.: *La división del trabajo social*, Madrid, 1987]. Durkheim sostenía que los grupos profesionales podían servir de intermediarios fundamentales entre los individuos y la economía en general, fomentando la solidaridad, regulando las normas profesionales y garantizando una organización más ética de la vida económica.

sino como un proceso en disputa, reconociendo que los expertos discrepan, incluso dentro de un mismo ámbito técnico, sobre metodologías, prioridades y las compensaciones recíprocas entre diferentes valores. En lugar de suprimir estos conflictos, la estructura democrática de las Asociaciones Técnicas los saca a la luz, permitiendo que se debatan en un marco que rinde cuentas al conjunto de la sociedad. Dado que los representantes técnicos pueden ser destituidos y sustituidos por sus Asociaciones, su autoridad depende del mantenimiento de la confianza de sus compañeros y compañeras, lo cual garantiza que el conocimiento experto siga siendo dinámico, adaptándose a los nuevos avances y a las prioridades en proceso de evolución en vez de osificarse en un estancamiento burocrático.

Sin salvaguardias, las Asociaciones Técnicas corren el riesgo de hacerse impermeables o resistentes al cambio. Para contrarrestar esto, necesitan protocolos que fomenten la formación cruzada, permitiendo que los trabajadores y trabajadoras de otros campos aporten nuevas perspectivas. La apertura evita que se conviertan en gremios cerrados, que sofocan la innovación y limitan el acceso a nuevos talentos. Una Junta de Inversión dedicada a las Asociaciones Técnicas aborda este desafío. Al igual que otras Juntas, esta asigna recursos de inversión, que las Asociaciones necesitan para mejorar sus propias instalaciones de formación, su infraestructura y sus herramientas. Al mismo tiempo, esta Junta certifica a las Asociaciones, garantizando que cumplen rigurosos estándares de profesionalidad, conducta ética y valor social. La Junta también podría mediar en las disputas surgidas en el seno de las Asociaciones o entre Asociaciones rivales, además de juzgar las eventuales acusaciones de pseudociencia y ayudar a estructurar los campos emergentes, como, por ejemplo, la biología sintética.

Por último, la Junta sirve como espacio donde las Asociaciones negocian los ingresos relativos entre las distintas profesiones, alineando las recompensas financieras con las prioridades sociales. En una economía multicriterio, como hemos visto, las empresas no pagan directamente los salarios de los trabajadores. En su lugar, pagan alquileres por la mano de obra, al igual que pagan alquileres por los activos fijos y los terrenos. Estos alquileres se denominan en PUNTOS y fluctúan en función de la escasez o abundancia de los diferentes tipos de mano de obra. Cuando aumenta la demanda de trabajadores y trabajadoras de una profesión concreta, los alquileres aumentan, lo que anima a las empresas a

economizar en su uso. Cuando la demanda decae, los alquileres disminuyen, lo que indica la disponibilidad de mano de obra. Sin embargo, los salarios individuales, pagados en CRÉDITOS, no fluctúan con el precio de sus respectivos alquileres.

Decidir cómo se comparan los salarios entre las distintas profesiones –si las enfermeras deben ganar más que los ingenieros o los cuidadores más que los administrativos– es una cuestión social. Dado que los CRÉDITOS corresponden a una parte fija de la producción total, aunque el Demos puede ampliarla o reducirla con el tiempo, aumentar los salarios en un área reduce efectivamente los de otras. La fijación de salarios se convierte, por lo tanto, en un proceso estructurado de equilibrio entre las necesidades económicas y los valores sociales en evolución. Tenderá a prevalecer una tendencia general hacia la compresión de las diferencias salariales. Sin embargo, si una profesión ve aumentar los costes de su alquiler, pero tiene dificultades para atraer a suficientes trabajadores, puede ser conveniente aumentar los salarios para fomentar la entrada de más personas en la misma. Por el contrario, si demasiadas personas se incorporan a una profesión con oportunidades limitadas, los salarios pueden ajustarse a la baja para desincentivar la sobresaturación. Pero las decisiones salariales no vienen dictadas directamente por los cambios en las condiciones del mercado de trabajo. Una sociedad que valora la enseñanza o el trabajo asistencial, por ejemplo, puede optar por aumentar los salarios de esas profesiones, incluso si sus respectivos costes de alquiler siguen siendo relativamente bajos. Las señales del mercado de trabajo son una consideración entre muchas otras, siempre subordinadas al juicio colectivo sobre las prioridades sociales.

Desvincular la determinación de los salarios de la toma de decisiones a escala empresarial tiene importantes consecuencias para la coordinación económica. En el capitalismo, los salarios varían en función de la rentabilidad de las empresas, lo que da lugar a empleos bien remunerados en los sectores financiero y tecnológico, mientras que empleos esenciales, como la enseñanza y los cuidados, siguen estando mal remunerados. En la economía multicriterio, los salarios se fijan a escala social, lo que evita que surjan desigualdades extremas dentro de los sectores y entre ellos. Las empresas, por su parte, no compiten por la mano de obra ofreciendo salarios más altos. Simplemente deciden si contratar a un tipo de trabajador o trabajadora determinado basándose en la tarifa de alquiler de la Asociación. Este sistema salarial también remodela la

lealtad de los trabajadores. En el capitalismo, los trabajadores dependen de sus empleadores para obtener ingresos, lo que los hace vulnerables a la explotación y a la precariedad laboral. Aquí, la identidad profesional se basa en las Asociaciones Técnicas y no en las empresas. Mientras los trabajadores mantengan los estándares de su profesión, conservarán sus niveles salariales incluso cuando cambien de trabajo. Si no hay trabajo para ellos en una empresa en particular, pueden marcharse sin temor a perder su salario. Si una empresa presiona a los trabajadores para que se autoexploten —exigiéndoles una productividad excesiva, recortando gastos o ignorando la ética profesional—, los trabajadores pueden recurrir a su Asociación en busca de apoyo. Esto garantiza que las presiones por la eficiencia no degraden las condiciones de trabajo y que los estándares profesionales sigan siendo la base de la vida económica.

8. LA VIDA ASOCIATIVA

Un sistema verdaderamente multicriterio necesita instituciones que hagan algo más que asignar recursos. Estas también deben dar forma al conocimiento, coordinar los saberes expertos y proporcionar un espacio para la experimentación cultural y política. A diferencia de épocas anteriores durante las cuales la innovación podía surgir de avances aislados registrados en el seno de empresas individuales, el desarrollo tecnológico moderno requiere una infraestructura masiva e interconectada de investigación, consulta y coordinación. Al mismo tiempo, una economía multicriterio exige más a su tecnología que lo que jamás hizo una economía basada ante todo en la eficiencia, ya que precisa de una infraestructura capaz de identificar y mitigar las compensaciones recíprocas de valor entre distintos ámbitos en lugar de ignorarlas en pos de una eficiencia de corto alcance. Aunque las Asociaciones Técnicas sean capaces de garantizar el fomento del conocimiento experto especializado y su integración en los procesos de toma de decisiones económicas, no constituyen por sí mismas un sistema de innovación completo. En una sociedad multicriterio, el progreso tecnológico no se limita a una única trayectoria impulsada por la eficiencia, sino que sirve a diversos objetivos sociales y culturales. Lejos de frenar el dinamismo tecnológico, este sistema lo acelera y lo generaliza.

Incluso si una sociedad multicriterio decidiera limitar la producción total por razones ecológicas, la innovación seguiría siendo vigorosa,

ampliando las fronteras de lo que puede lograrse dentro de los límites impuestos por las constricciones medioambientales; las nuevas fuentes de energía, los métodos de producción regenerativos y los procesos industriales sin residuos podrían permitirle ampliar su producción sin exceder los límites planetarios. La dirección del cambio tecnológico vendrá determinada por el tipo de problemas que la sociedad decida resolver y los objetivos que decida perseguir⁴⁸. A medida que cambian las prioridades, también lo hacen los fondos de inversión para la innovación. Para mantener este desarrollo, la economía multicriterio dependerá de un amplio ecosistema de instituciones –institutos de investigación, consultoras, organizaciones locales– cuyos componentes desempeñarán respectivamente un papel específico en la orientación de la innovación. La historia del avance tecnológico ya muestra lo que este tipo de sistema de innovación pública puede lograr: Internet, las vacunas que salvan vidas y las tecnologías de energía renovable surgieron de la inversión pública y la colaboración abierta y no de la competencia del mercado. Al otorgar prioridad a los objetivos sociales sobre los beneficios financieros, este sistema garantiza que el progreso tecnológico beneficie a todos, impulsando el desarrollo por sendas que de otro modo habrían permanecido inexploradas.

La necesidad de la vida asociativa va más allá del ámbito técnico. Una sociedad multicriterio consiste en permitir que las personas vivan vidas más ricas y plenas. Lo que podríamos llamar la capa asociativa se abre a un mundo de actividades culturales y políticas que las personas realizan libremente, de acuerdo con sus propios términos. Sus organizaciones autogestionadas constituyen un «Sector Libre», poblado de Asociaciones Libres⁴⁹. Este énfasis en la capa asociativa significa que, en el sentido más estricto, ya no estamos hablando de un modelo de economía. Es el

⁴⁸ See Nils Rochowicz, «Planning Progress: Incorporating Innovation and Structural Change into Models of Economic Planning», *Competition and Change*, vol. 29, núm. 1, 2024.

⁴⁹ Algunas corrientes del pensamiento socialista han destacado desde hace mucho tiempo la importancia fundamental de la vida asociativa. Véase Piotr Kropotkin, *The Conquest of Bread* (1892) [ed. cast.: *La conquista del pan*, Barcelona, 2017]; G. D. H. Cole, *Guild Socialism Restated* (1920); R. H. Tawney, *The Acquisitive Society* (1920) [ed. cast.: *La sociedad adquisitiva*, Barcelona, 2016]; Anton Pannekoek, *Workers' Councils* (1947) [ed. cast.: *Los consejos obreros*, 2021]. Véase también John O'Neill, «Socialism, Associations and the Market», *Economy and Society*, vol. 32, núm. 2, 2003; y, para un tratamiento privilegiado de las asociaciones en la democracia económica, Paul Hirst, *Associative Democracy: New Forms of Economic and Social Governance*, Cambridge, 1994.

esbozo de una arquitectura social más amplia: un sistema que integra lo que antes llamábamos «la economía» en el terreno más amplio de la vida política, social y cultural. Las fronteras entre la economía y la política, que en el capitalismo siempre fueron objeto de controversia, pero nunca se disolvieron por completo, aquí se desmantelan deliberadamente. Lo que antes era la economía ya no es un ámbito aislado, sino que se convierte en un campo de juicio colectivo y de imaginación política profundamente entrelazado con todos los demás aspectos de la vida.

A diferencia de la economía funcional, que desde esta perspectiva incluye las Asociaciones Técnicas y el sistema de inversión, el Sector Libre es un espacio estructurado en el que las personas se organizan, experimentan y participan en la vida intelectual, cultural y política sin verse constreñidas por justificaciones económicas. A diferencia de los mercados, que exigen que los bienes y servicios demuestren su valor a través de la demanda de los consumidores, o de las Juntas de Inversión, que asignan los recursos en función de las prioridades sociales evaluadas, el Sector Libre se rige por un principio diferente: el derecho de las personas y los grupos a explorar y desarrollar ideas, movimientos e instituciones sin necesidad de justificarse de antemano. No se trata de una característica secundaria de una sociedad multicriterio, sino de una parte esencial de su dinamismo, adaptabilidad y apertura. Históricamente, los debates sobre un ámbito de libertad más allá de la necesidad económica se han centrado a menudo en las actividades individuales: la educación, el ocio y el enriquecimiento cultural. Pero, en la práctica, lo que la gente hace en su tiempo libre es tan a menudo asociativo como solitario⁵⁰.

⁵⁰ La distinción entre el ámbito de la necesidad y el ámbito de la libertad tiene profundas raíces en el pensamiento occidental, que se remonta a la *Política* de Aristóteles, donde el ámbito de la libertad estaba reservado a una elite ociosa, que vivía del trabajo de los demás. Se produjo una gran transformación con la obra *Utopía* (1516) de Tomás Moro en la que la división ya no se producía entre clases, sino en la jornada de cada individuo, equilibrando el trabajo necesario y el ocio para todos, lo cual se basaba en concepciones más positivas de la dignidad del trabajo de finales de la Edad Media. Esta tradición fue desarrollada ulteriormente por los primeros comunistas, como Étienne Cabet, y culminó en la famosa discusión de Marx sobre el tiempo libre en los *Grundrisse* y *El capital*, vol. III, donde abordó la existencia de un «ámbito de libertad» que solo surgía más allá del «ámbito de la necesidad». El planteamiento de Marx sobre el tiempo libre individualizado puede deber algo a la obra de Schiller *Cartas sobre la educación estética de la humanidad* (1795), que enfatizaba el cultivo de las capacidades creativas libres. Karl Kautsky también vinculó la expansión del tiempo libre con el futuro de la clase obrera en *The Class Struggle* (1892). Este tema fue retomado por muchos pensadores del siglo XX, de W. E. B. DuBois a André Gorz.

La organización del Sector Libre garantiza que las personas no solo dispongan del tiempo, sino también de los recursos necesarios para cuestionar y remodelar la trayectoria de la propia sociedad. Las actividades en el seno del Sector se financian mediante PUNTOS LIBRES, que representan una parte específica de la producción total efectuada en cada ciclo. Como hemos mencionado anteriormente, estos se distribuyen de forma equitativa entre todas ellas, mensual o anualmente. A diferencia de los CRÉDITOS, que se utilizan para el consumo personal, los PUNTOS LIBRES solo pueden donarse a Asociaciones Libres. Los individuos pueden crear o apoyar asociaciones en los ámbitos artístico, científico, político y cultural: clubes de juego y tecnología, federaciones científicas y deportivas, grupos y partidos políticos propiamente dichos. Estas Asociaciones Libres utilizan sus PUNTOS para pagar los gastos de alquiler de locales e instalaciones, equipos e insumos intermedios, es decir, de todo lo que necesitan para funcionar, al igual que las empresas. Sin embargo, no se les permite contratar mano de obra. El trabajo en el Sector Libre sigue siendo voluntario, lo que garantiza que sus actividades se basen en la motivación intrínseca y no en incentivos mercantiles. Para participar, las asociaciones solo tienen que registrarse en la Junta de Inversiones que gobierna el Sector Libre, que también se encargará de supervisar estas asociaciones para asegurarse de que no infringen ninguna norma. Una vez registradas, pueden adquirir PUNTOS LIBRES a través de donaciones y solicitar activos fijos.

En las sociedades capitalistas, el tiempo libre se ha definido en gran medida en términos negativos: tiempo libre del trabajo, un escape temporal de las exigencias económicas. Las personas dedican gran parte de su tiempo libre a recuperarse del agotamiento, a adormecerse con entretenimientos pasivos –ver la televisión o navegar por las redes sociales– o a ponerse al día con las tareas domésticas. Las presiones del exceso de trabajo, la precariedad financiera y la inestabilidad social dejan poco espacio para una participación sostenida en la vida creativa, intelectual o política. Una sociedad multicriterio cambia esta dinámica. La seguridad universal, la reducción de la jornada laboral y los servicios universales liberan a las personas de la ansiedad por la supervivencia, lo que les permite pensar más allá de las necesidades inmediatas y explorar sus pasiones. A medida que las personas se adaptan a su nueva libertad, el tiempo libre evoluciona de un lugar de recuperación a un ámbito activo de la vida social. Este cambio, de la recuperación al compromiso, redefine el significado mismo de la libertad. No se trata simplemente de la

libertad frente a la coacción económica, sino de la libertad de perseguir proyectos compartidos y de cocrear la vida social junto con otros y otras⁵¹.

Una de las características definitorias de la actividad del Sector Libre es que opera en un espacio en el que las necesidades suelen estar poco o nada definidas. Los entusiastas de la robótica pueden construir máquinas que amplían los límites de lo posible simplemente porque disfrutan del reto. Un equipo de investigación independiente puede explorar campos especulativos del conocimiento, que las instituciones establecidas descartan. Estos esfuerzos no están limitados por expectativas sociales preexistentes o argumentos estrechos sobre la utilidad; están impulsados por las motivaciones intrínsecas de los participantes. Debido a la flexibilidad de los PUNTOS LIBRES, estas asociaciones pueden existir a múltiples escalas. Algunas son pequeños grupos autoorganizados. Otras se convierten en instituciones de mayor tamaño, que sirven de intermediarios, agregadores o centros neurálgicos para la coordinación de trabajos especializados. Los consejos de las artes, por ejemplo, pueden recoger PUNTOS LIBRES de los donantes y redistribuirlos entre los creadores experimentales. Los institutos de investigación independientes desempeñan un papel paralelo en el ámbito intelectual. Las organizaciones religiosas y espirituales también se sostienen gracias al apoyo voluntario. Los donantes no pueden dictar lo que hacen las organizaciones, pero pueden retirar su apoyo si la Asociación ya no se ajusta a sus valores. En el capitalismo, muchas actividades artísticas e intelectuales dependen de benefactores ricos, subvenciones gubernamentales o patrocinios corporativos, cada uno de los cuales impone restricciones a lo que se puede perseguir. El Sector Libre sustituye esto por una forma descentralizada de mecenazgo a tenor de la cual el poder sobre la vida cultural, intelectual y política se distribuye por toda la sociedad.

⁵¹ Pocas discusiones sobre el ámbito del tiempo libre han abordado plenamente su dimensión asociativa y colectiva. En *La conquista del pan*, de Kropotkin, se concede una importancia temprana a la asociación voluntaria. Bertrand Russell, en su excelente y poco estudiada obra *Proposed roads to freedom* (1918) [ed. cast.: *Caminos de libertad: socialismo, anarquismo y comunismo*, Madrid, 2010], criticó la propuesta de Kropotkin y desarrolló sus propias teorías sobre el arte y la cultura bajo el socialismo. Las críticas posteriores del ocio en el capitalismo, como *La société du spectacle* (1967), de Guy Debord [ed. cast.: *La sociedad del espectáculo*, Valencia, 2005], y otros escritos situacionistas, apuntaban hacia concepciones asociativas de la libertad y la producción cultural. Sin embargo, ninguno de estos planteamientos abordaba directamente la cuestión de cómo se podrían asignar colectivamente los recursos en el ámbito de la actividad libremente asociada, que es el tema central que nos ocupa aquí.

La importancia política del Sector Libre va mucho más allá de la vida cultural e intelectual. También es fundamental para el sistema democrático. En el capitalismo, la organización política está muy limitada por las barreras financieras. Los movimientos que desafían las estructuras de poder arraigadas luchan por conseguir recursos, mientras que los intereses de las empresas y las elites dominan el discurso público a través de las prácticas de *lobby*, el control de los medios de comunicación y la financiación de las campañas electorales. En una sociedad multicriterio, las organizaciones políticas reciben apoyo directo a través de PUNTOS LIBRES, lo que garantiza que los movimientos se mantengan gracias a la participación pública y no al patrocinio de las elites. Este sistema permite un panorama político mucho más dinámico y competitivo. Las nuevas ideas pueden ganar terreno sin necesidad del respaldo de los intereses establecidos. Los movimientos que podrían tener dificultades bajo el capitalismo pueden prosperar en un mundo en el que las personas tienen los medios para apoyarlos directamente. Las organizaciones políticas pueden formarse, disolverse y reconfigurarse a medida que cambian las prioridades de la población. La vida democrática en el Sector Libre garantiza que la sociedad esté siempre abierta a la controversia interna, el aprendizaje colectivo y la renovación política.

Lo que se ha esbozado aquí es simplemente el marco institucional de una economía multicriterio liberada de la lógica del beneficio. El contenido político que la anima surgiría de las elecciones y luchas de sus participantes, quienes, seguros de su acceso a las necesidades básicas, serían libres de decidir colectivamente cuál de los posibles futuros alternativos desean perseguir y de transformar su mundo en consecuencia.